CORTES GENERALES

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Sesiones informativas de Comisiones

Acta taquigráfica de la sesión celebrada por la

COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES

el jueves, 7 de febrero de 1980, con asistencia del
señor Ministro (Oreja Aguirre).

Se abre la sesión a las 12 horas de la mañana.

El señor PRESIDENTE: Señores Diputados, vamos a dar comienzo a la sesión de trabajo de nuestra Comisión de Asuntos Exteriores.

Antes, quisiera dar a los señores Diputados cuenta de la reunión que hemos tenido, la Mesa y los Portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios, en orden a la racionalización de trabajos y a una serie de temas que teníamos pendientes en el seno de la Comisión.

En primer lugar, quisiera informarles que el próximo jueves 21, a las 12 de la mañana, celebraremos sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores para el despacho y tramitación de distintos Convenios, cuyo plazo de enmiendas vencerá el 18 de febrero.

En segundo lugar, querría pedir a los Grupos Parlamentarios que todavía no lo han hecho, que designen a los representantes que van a actuar como Comité de Enlace con el Ministerio de Asuntos Exteriores para el seguimiento de los trabajos en relación con la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea de Madrid, asunto que se trató, precisamente, en la última comparecencia del señor Ministro de Asuntos Exteriores en el seno de la Comisión. Habíamos quedado en que aquellos Grupos Parlamentarios que quisieran designar un representante, lo hicieran saber a esta Mesa para, de forma inmediata, enlazar con las autoridades responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores que se ocupan directamente de estos temas.

Por Coalición Democrática se ha designado a don José María de Areilza; por Unión de Centro Democrático se ha designado a don Javier Rupérez; por el Grupo Parlamentario Comunista, a don Jaime Ballesteros. Entiende esta Presidencia, salvo que en este momento me dijeran otra cosa, que por el Grupo Parlamentario Socialista el representante es don José Miguel Bueno, y pediría en este momento confirmación al Grupo Parlamentario Socialista o

que, por lo menos, nos lo haga saber lo antes posible. Quisiera ahora preguntar a la representación de la Minoría Catalana y del Grupo Parlamentario Vasco, Partido Nacionalista Vasco, y a los Andalucistas, si han designado ya el representante para actuar en este Comité de Enlace. ¿Hay algún representante de la Minoría Catalana o del Partido Nacionalista Vasco? (Pausa.) Pues esta Presidencia se pondrá en contacto con ellos para que designen cada uno de ellos un representante, y poder dejar formalizado y constituido, dentro del seno de esta Comisión, el Comité de Enlace con el Ministerio de Asuntos Exteriores en relación con los trabajos de la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea.

También quisiera comunicar a los miembros de la Comisión que el señor Ministro de Relaciones con las Comunidades Europeas nos ha comunicado su disposición para comparecer ante el seno de la Comisión cuando la propia Comisión lo considere oportuno. Los miembros de la Mesa y los Portavoces hemos mantenido un cambio de impresiones y se nos ha sugerido por algunos representantes de los Grupos Parlamentarios que, quizá, podríamos estudiar, para próximas reuniones en relación con el seguimiento de las negociaciones de nuestro país con la Comunidad Europea, la organización de Comisiones conjuntas, atendiendo a las materias específicas de que vayan a ser objeto estas reuniones. En concreto, si, por ejemplo, vamos a tratar de las negociaciones del paquete agrícola o de cuestiones industriales, o de otro tipo de cuestiones específicas, se nos ha sugerido la posibilidad de que no sólo compareciera el señor Ministro de Relaciones con las Comunidades Europeas sino que, eventualmente, pudieran también comparecer, en ese caso, el señor Ministro de Agricultura o el señor Ministro de Industria, y que, incluso, citáramos no solamente a los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores, sino a representantes de otras Comisiones del Con-

greso, en este caso la Comisión de Agricultura o la Comisión de Industria, etcétera. Esta es una cuestión que voy a plantear al Presidente del Congreso y que también trasladaré a los Ministros respectivos, por si pudiera encuadrarse dentro de los preceptos de nuestro Reglamento, para que, en ese caso, pudiéramos organizar una próxima reunión, no solamente, repito, con el Ministro de Relaciones con las Comunidades Europeas, y no solamente para los miembros de la Comisión de Asuntos Exteriores, sino también con otros miembros de Comisiones afectadas por los trabajos de dicha negociación.

Pidiendo disculpas al señor Ministro de Asuntos Exteriores por haber dado cuenta a los miembros de la Comisión de estos trabajos, que son más bien de carácter interno, vamos a proceder a abrir la sesión informativa con el señor Ministro de Asuntos Exteriores en relación con los acontecimientos surgidos en la Embajada de España en Guatemala. Como desde el momento en que se convocó la Comisión hasta el día de hoy, en que se va a celebrar dicha sesión informativa, desgraciadamente se han producido también acontecimientos lamentables que afectan a otra representación diplomática de España en otro país centroamericano, El Salvador, confío en que en la intervención del señor Ministro de Asuntos Exteriores tendremos oportunidad de recibir puntualmente información sobre dichos acontecimientos, no solamente de los que afectan a nuestro país en relación con Guatemala, sino también a la representación diplomática española en El Salvador.

Hemos convenido que, después de la intervención del Ministro de Asuntos Exteriores, los distintos Grupos Parlamentarios tendrán oportunidad de consumir un turno como tales Grupos, y una vez que todos los Grupos Parlamentarios hayan hecho uso de la palabra podremos dar también a los Diputados, a título individual, la oportunidad de formular aquellas preguntas que deseen al señor Ministro de Asuntos Exteriores.

El señor Ministro tiene la palabra.

El señor **MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES** (Oreja Aguirre): Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Diputados, efectivamente tengo el propósito de hacer un informe, tanto sobre la situación en la Embajada de España en Guatemala como de la situación

en la Embajada de España en El Salvador, y en ese sentido informaré hasta de los últimos acontecimientos y de las distintas gestiones que se han venido haciendo.

Empezando por Guatemala, quiero informar a la Comisión de las decisiones que han sido adoptadas por el Gobierno y de las razones en que se apoyan, así como de las medidas instrumentadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores para proteger los intereses españoles y garantizar, dentro de la medida de lo posible, la seguridad de los españoles residentes en Guatemala.

Ante todo quisiera presentar a Sus Señorías una relación sucinta y precisa de los hechos que prueban, de forma evidente, la responsabilidad del Gobierno de Guatemala y de sus Fuerzas de Seguridad que, desoyendo las reiteradas peticiones del Embajador y las reiteradas peticiones mías, irrumpieron en la Embajada, dando origen a la tragedia que hoy todos lamentamos. Y, asimismo, debo resaltar también la conducta irreponsable del grupo de ocupantes que, sirviéndose de unos campesinos de Quiché, fueron actores importantes en el desencadenamiento de los trágicos sucesos.

En ese sentido quiero expresar también la condena por la ocupación de la Embajada, y, por muy legítimos que sean los derechos que defiendan los ocupantes, ello no justifica la agresión a un país, como en este caso, con esta ocupación y con las dramáticas consecuencias que la misma ha llevado consigo.

Vamos a pasar rápidamente revista a los hechos, que conocen perfectamente Sus Señorías, pero con una exposición metodológica de cómo han sido estos sucesos y cuál ha sido la actuación del Gobierno y de la Embajada en los distintos momentos.

Poco después de las seis y veinticinco de la tarde, hora española, del jueves 31 de enero, se recibió en el Ministerio de Asuntos Exteriores la noticia de que había sido ocupada la Embajada de España en Guatemala. Inmediatamente entré en contacto telefónico con el Embajador en Guatemala, señor Cajal, quien me informó que un grupo de unos treinta campesinos, al parecer armados, y cuyas peticiones no conocía en ese momento, habían ocupado la Embajada.

El Embajador había intentado, inmediatamente de penetrar estas personas, ponerse en contacto con el Viceministro de Asuntos Exte-

riores, porque al mismo tiempo que se producía la entrada en la Embajada, aparecía ya, a los escasos minutos, un grupo de policías que comenzaban a estar en el entorno de la Embajada.

El Embajador no pudo ponerse en contacto con el Canciller; no pudo ponerse en contacto tampoco con el Ministro de Asuntos Exteriores, ni con el Director General de Policía. Pudo hablar únicamente con el Viceministro de Asuntos Exteriores, y el Embajador me pidió que telefonease al Canciller guatemalteco para pedir, por de pronto, que se retirasen las Fuerzas de la Policía o, al menos, que no penetrasen en los locales de la Embajada.

Se ha sabido luego que la mayoría de los ocupantes, que en su mayor parte son campesinos de la región septentrional de Quiché, forman parte de un grupo de unos cuatrocientos que se había desplazado a la capital quince días antes, aproximadamente, y que realizaban unos actos de protesta contra la situación que prevalece en aquella región. Actos análogos habían tenido lugar en la ciudad de Guatemala, pero esa misma mañana, en ese mismo día de la ocupación de la Embajada, las autoridades locales habían declarado que reaccionarían con el máximo rigor ante la ocupación de edificios.

Intenté comunicar inmediatamente desde Madrid con las autoridades de Guatemala, hablé con el Ministerio de Relaciones Exteriores; no estaba el Canciller y hablé con el primer Ministro. Le pedí solemnemente, formalmente, insistentemente, que las Fuerzas de Seguridad se retirasen de las inmediaciones de la Oficina Diplomática española y el Vicecanciller me prometió que haría inmediatamente una gestión.

Entretanto, el Embajador seguía haciendo gestiones: habló incluso con el Embajador de España en Costa Rica, que transmitió a Madrid la información que habíamos recibido minutos antes, y, en un determinado momento, la Embajada vio cortadas sus comunicaciones telefónicas, sin duda por obra de la policía, que estaba ya en las inmediaciones del edificio. A partir de ese momento, el Embajador, señor Cajal, consiguió un megáfono, que habían introducido los propios ocupantes, y pidió desde la Embajada a las Fuerzas de la Policía su inmediata retirada. Les asegura a estas Fuerzas que entiende que está en condiciones de garantizar la evacuación pacífica por parte de los ocupantes, quienes, mientras tanto, se habían comprometido a salir

de la Embajada de España con la condición de que el Embajador les acompañase hasta la Universidad de San Carlos, donde deseaban refugiarse y celebrar una reunión. Las Fuerzas de la Policía hicieron caso omiso de estas exhortaciones, que, ciertamente, de ser atendidas, hubieran evitado la matanza que tuvo lugar después.

Según se supo luego, al mismo tiempo, simultáneamente a estas acciones del Embajador, varias personas, entre ellas el Presidente de la Cruz Roja en Guatemala, doctor Bauer; el Presidente en funciones de la Beneficencia española, don Carlos del Valle, y la madre de una de las secretarías de la Embajada de España, que había de morir inmediatamente después, se pusieron en contacto con el Director de la Policía, que se negó a retirar a sus hombres.

Cerca de las nueve de la noche, tres horas más tarde de la ocupación, después de múltiples intentos, logré, por fin, hablar con el Canciller de Guatemala, don Rafael Eduardo Castillo Valdez, a quien reiteré la petición de retirada de las fuerzas en tonos más enérgicos y requerí la no intervención en los locales de la Embajada.

El Ministro me prometió que atendería la petición y que se trasladaría inmediatamente al lugar de los hechos. Efectivamente, luego declaró públicamente que así lo había hecho. Quiero dejar claro que había tiempo suficiente, a pesar de las declaraciones de Guatemala de que había existido una precipitación por parte de la policía. Esta afirmación no es exacta, puesto que había tiempo suficiente desde esta llamada hasta la entrada de las Fuerzas de Orden Público en el recinto de la Embajada. Fue en ese momento, viendo cómo estaba la situación, cuando decidí enviar al Director General de Política Exterior para Iberoamérica, señor Bermejo, acompañado del Director de Centroamérica, del Ministerio de Asuntos Exteriores, que salieran en el primer avión para Guatemala. Salieron a la una de la madrugada, alrededor de las diez de la noche, hora de Madrid, es decir, tres horas y cuarenta y cinco minutos después de la entrada de los campesinos.

Las Fuerzas de la Policía comienzan el asalto a la Embajada, y no deseo insistir en ello, puesto que lo conocen muy bien Sus Señorías, porque se ha publicado en la prensa y se ha visto en la televisión, llevando hachas y machetes con los que destrozaron puertas y ventanas, abrieron un boquete en el techo y, poco a poco, fueron

arrinconando a los ocupantes, entre los que se encontraban el ex Vicepresidente de la República de Guatemala, señor Cáceres, y el ex Canciller, Ministro de Relaciones Exteriores, señor Molina Orantes, que se encontraban en ese momento en la Embajada para tratar de la celebración de un Congreso de Derecho Procesal. Ambos, como saben Sus Señorías, perecerían poco después en el edificio.

Se refugiaron en el despacho del Embajador alrededor de unas cuarenta personas, en un espacio aproximadamente de 14 ó 15 metros cuadrados. El Embajador, en ese momento, cuando seguían avanzando, estaban entrando ya, habían pasado el primer piso y estaban en el segundo piso, seguía gritando a las Fuerzas de Seguridad para que cesasen en su acción, y lo hizo desde la puerta de su despacho, ante el cual los ocupantes habían levantado una barrera interior de muebles.

El Embajador ha podido comprobar ya, en ese momento, que los ocupantes portaban armas, pistolas y tenían también unas botellas explosivas, las denominadas cócteles «molotov». En ese instante, uno de los campesinos ocupantes encañona al Embajador y, al mismo tiempo, las Fuerzas de Seguridad rompen y destrozan la puerta con un hacha. Simultáneamente, uno de los campesinos arroja un cóctel «molotov», se produce la explosión y en ese instante, cuando se incendia la habitación y se destroza la puerta, se extienden las llamas y el Embajador se echa al suelo porque está envuelto en llamas. Se tira por la escalera y llega hasta el fondo de la misma, donde le detiene un policía y le introduce en un coche celular. Permanece en ese coche celular por espacio de un cuarto de hora. Es entonces cuando la Vicepresidenta de la Cruz Roja, que se encuentra allí, exige que, inmediatamente, se dé asistencia al Embajador, que es llevado en una ambulancia al hospital.

A partir de ese momento, el Ministerio continúa con su acción, esencialmente para asegurar la defensa de los intereses españoles y para sensibilizar a la opinión mundial ante el bárbaro suceso.

Además de los dos funcionarios que he mencionado hace un momento, que salieron para Guatemala y llegarían a primera hora de la mañana, se ordenó al Embajador de España en San Salvador, señor Sánchez Mesa, que se desplazase en automóvil hasta Guatemala —tarda

aproximadamente unas tres horas y media en llegar—, y se dispuso también que un consejero de la Embajada, destinado en Nueva York, que fue durante cuatro años Encargado de Negocios en la Embajada de Guatemala y que conoce perfectamente el país —es un experto, quizá el mejor que tenemos en el tema del área, especialmente de Guatemala—, se trasladase inmediatamente desde Nueva York a la capital guatemalteca. Era necesario e imprescindible suplir la acción de los miembros de la Embajada para hacerse cargo de los archivos, de los documentos, para proteger nuestros intereses y ponerse en contacto inmediatamente con la colonia española.

A partir de las 12 de la noche, hora española, prosigue la gestión diplomática mientras comenzaba en el Palacio de la Moncloa una reunión convocada al efecto por el Presidente del Gobierno, que continuó hasta las seis de la mañana del viernes. Esa madrugada fue convocado el Embajador de Guatemala en Madrid, coronel don Ernesto Paiz Novales, a quien se presentó la más enérgica protesta por lo ocurrido. Simultáneamente, se estableció contacto por teléfono con las propias autoridades guatemaltecas. Seguimos hablando en varias ocasiones con las mismas, cuya postura queda reflejada en las distintas comunicaciones que hizo públicas la Cancillería de Guatemala a lo largo de esa noche.

En la primera de las comunicaciones, que fue alrededor de las dos de la madrugada, hora española, el Canciller de Guatemala atribuía los hechos a la acción de los terroristas que habían ocupado la Embajada, sin mencionar siquiera la actuación de sus propias Fuerzas. A las seis y media de la madrugada del día 1, el Canciller de Guatemala, que habló conmigo por teléfono, me leyó un comunicado de su Gobierno reconociendo la intervención de la Policía, lo cual era un cambio con respecto a la situación anterior, pero afirmando que ésta se había producido como consecuencia de la demanda de auxilio por parte de las personas que estaban dentro de la Embajada, por parte de los miembros de la Embajada. Se presentaban unas excusas, pero no se anunciaba ningún tipo de iniciativa, ni siquiera la apertura de una investigación. Respondí que el texto era absolutamente inadmisible, que no recogía la verdad de lo sucedido y que el Gobierno español no podía recibir una

declaración en la que no se manifestaba que tales actos de la Policía se habían producido expresamente en contra del deseo del Gobierno español y de su Embajador.

Alrededor de las once de la mañana, hora española, del día 1, el Gobierno de Guatemala había adoptado ya una nueva posición, una postura, anticipando el contenido del telegrama que me fue cursado a las 7,15, hora de Guatemala, 2,20 hora española. En este telegrama se presentaban formales excusas al Gobierno español, se reconocía que los agentes de la Policía habían penetrado en la misión diplomática en un acto de precipitación, y se decía también que el Gobierno y el pueblo de Guatemala se encontraban profundamente conmovidos y que el Gobierno había iniciado una investigación para esclarecer los hechos y para decidir las responsabilidades correspondientes.

Debo señalar también que durante las primeras ocho horas transcurridas desde que el Embajador Cajal fue hospitalizado en el sanatorio, ninguna autoridad guatemalteca se personó para interesarse por su salud y para manifestar la condolencia del Gobierno. Esto fue confirmado, al cabo de estas ocho horas, por el propio Embajador Sánchez Mesas, que está en este momento en la Embajada de El Salvador, y que había llegado directamente desde El Salvador hasta la clínica, donde, dijo, se advertía en torno a la clínica la presencia de innumerables policías; policías que, por otra parte, no han impedido que haya sido raptado después, desde la propia clínica, el único campesino superviviente de la matanza, que, como saben, ha sido asesinado.

Por lo que respecta a las gestiones realizadas en la capital de Guatemala por el Director General de Política Exterior para Iberoamérica, que llegó en el mediodía del día 1, éstas se basaron fundamentalmente en tres direcciones: primero, en reafirmar la seguridad personal del Embajador; corría un grave riesgo la integridad física del Embajador. Por tanto, las primeras acciones debían ser las de asegurar la vida del Embajador.

En segundo lugar, comunicar a las autoridades de Guatemala la ruptura de las relaciones diplomáticas en la línea de una nota que fue entregada oficialmente al Embajador de Guatemala en Madrid. Y, por fin, establecer los contactos con la colonia española, sensibilizada por

los acontecimientos de la Embajada de España, y por la posible ruptura de las relaciones diplomáticas, por las consecuencias que esto podría entrañar.

En primer lugar, por lo que respecta a la seguridad personal del Embajador, se procedió de forma inmediata a establecer contacto con los Embajadores allí acreditados, muy especialmente con los Embajadores de Venezuela y de Norteamérica, ambos amigos personales del señor Cajal. A mi vez había llamado al Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela. Una de las veces que llamé al hospital, precisamente con quien hablé fue con el Embajador de Venezuela y le encargué formalmente que fuese Venezuela quien se encargase de la defensa de los intereses españoles en Guatemala. Tanto el Embajador norteamericano como el venezolano señalaron su preocupación por la escasa seguridad del centro donde se hallaba hospitalizado el Embajador. Y mientras uno se ofreció espontáneamente para acompañar en su traslado al Embajador Cajal, el Embajador norteamericano ofreció su propia residencia para albergarle y, al mismo tiempo, le ofreció coches blindados y hombres de su escolta personal.

De regreso ya al hospital, después del traslado del Embajador, se dio a conocer este plan de traslado al médico personal del Embajador, quien cooperó de una forma eficacísima en su realización —quiero expresarlo aquí públicamente— y, además, se ha prestado a acompañar al Embajador Cajal hasta Madrid. Esta mañana, como ya saben Sus Señorías, ha llegado el Embajador con su familia y el médico que le ha atendido a lo largo de todos estos días, quien permanecerá aquí unos días para dar cuenta de cuál ha sido el tratamiento que se ha seguido con él en estas últimas jornadas.

A la hora convenida se encontraban cuatro automóviles con placas diplomáticas estacionados en la puerta de la clínica, con amplio despliegue de hombres armados dentro y fuera del centro hospitalario. El Embajador, acompañado del de Venezuela y por el de Costa Rica y los diplomáticos españoles, fue trasladado en una silla de ruedas hasta el automóvil y de allí pasó a la residencia del Embajador de Estados Unidos.

Acompañados del Embajador venezolano, que era el que a partir de ese momento estaba encargado de los asuntos españoles, quedó con-

certada una entrevista del Director General de Política Exterior para Iberoamérica con el Canciller de Guatemala, a la que asistió el Vicecanciller y también el Consejero español, señor Picó de Coaña, que se había trasladado desde Nueva York. En el curso de esta conversación, el Director General de Política Exterior señaló la gravedad de los hechos y la preocupación española por que los responsables de la masacre fuesen hallados y por que se determinasen las responsabilidades de los inculpados. Sin abandonar en ningún momento el tono de serena firmeza, el Canciller de Guatemala alegaba, ante ciertas preguntas, las llamadas telefónicas realizadas desde nuestras oficinas en petición de auxilio como determinantes de la acción policial. Manifestó claramente el señor Bermejo el hecho, internacionalmente reconocido, de que únicamente el Jefe de la Misión diplomática tiene potestad para autorizar el ingreso de la Fuerza Pública en los locales de la representación diplomática, que está protegida por el fuero de la extraterritorialidad. El Canciller guatemalteco, en esos momentos, se esforzó en conseguir detener la petición de una reunión de la Comisión de Estados Americanos, estimando que esto no contribuía a crear un clima de serenidad para el esclarecimiento de los hechos.

Sin embargo, al trasladarme el Director General esta información entendí que no era aceptable ni admisible y, por consiguiente, dimos curso para que el tema se discutiera en el marco de la Organización de Estados Americanos, ciertamente una sesión sin precedentes, ya que es la primera vez que un Estado no miembro de la Organización plantea un tema para que deliberen sobre el mismo los miembros de pleno derecho de la Organización. Como saben los señores Diputados, España es observador de la Organización de Estados Americanos.

Por último, el Canciller de Guatemala mostró a los miembros de la misión española el documento que había sido enviado por las autoridades guatemaltecas a las representaciones en el exterior, incluidos los representantes permanentes en la Organización de Estados Americanos y en Naciones Unidas, con el ruego de su distribución. En este documento se hacía constar la llamada de auxilio por parte de la representación española y no se hacía en ningún momento referencia a la violación de la sede diplomática por las fuerzas policiales.

El señor Bermejo señaló con una absoluta firmeza que este hecho era falso y que, además, en el documento se admitía esa precipitación de los elementos policiales. El Canciller tuvo que admitir que así era. Es patente la mala fe por parte de las autoridades guatemaltecas al manobrar veladamente para presentar en los foros internacionales, tanto en la Organización de Naciones Unidas como en la Organización de Estados Americanos, una verdad amañada de los hechos.

En este sentido deben encuadrarse las declaraciones que había hecho el Embajador guatemalteco en Méjico, señor Barbieri, que, con absoluto trueque a la verdad, ha manifestado que fue el Embajador de España quien llamó a los ocupantes.

En el curso de la entrevista mantenida con el Canciller guatemalteco se señaló que España había designado a Venezuela para encargarse de los asuntos españoles, de la misma forma que se había comunicado aquí al Embajador de Guatemala.

En la tarde del sábado día 2, el Director General de Política Exterior para Iberoamérica, señor Bermejo, acompañado del señor Picó, mantuvieron una entrevista con los elementos más representativos de la colonia española e hicieron una convocatoria para que todos los miembros de la colonia que quisieran pudieran asistir, al menos los miembros más representativos. Fueron alrededor de una treintena de personas, entre las que se encontraban comerciantes, religiosos, directivos de asociaciones españolas, hombres de negocios —vienen a ser, aproximadamente, cinco mil los españoles que residen en Guatemala—, y se les dio la seguridad sobre el alcance práctico de la decisión española de romper sus relaciones diplomáticas con Guatemala.

Por fin, como saben, en la mañana de hoy ha llegado a Madrid el Embajador señor Cajal con su familia y he tenido ocasión de verle momentos antes de venir a reunirme con Sus Señorías. Permanece en Guatemala el Consejero enviado desde Venezuela, señor Picó de Moaña, encargado de la protección de los intereses españoles desde la Embajada de Venezuela.

Tras este análisis de los hechos y las distintas gestiones que han sido llevadas a cabo, expondré ahora a Sus Señorías lo que ha significado la reacción del Gobierno y cuál es la valoración de la situación.

Es claro que ante la violación flagrante de las normas internacionales que regulan la inmunidad y la inviolabilidad de la representación diplomática y de su personal, el Gobierno ha exigido que con las garantías necesarias se proceda a un total esclarecimiento de los hechos, se identifique a los responsables de la violación de la Misión diplomática, adoptando el acuerdo el Gobierno español, en tanto estas exigencias no se cumplan con plena satisfacción, de proceder a una ruptura de las relaciones diplomáticas, con cuyo pueblo, por otra parte, España se siente estrechamente unida por tantos y tan profundos vínculos.

La nota oficial dada por el Gobierno al término del Consejo de Ministros celebrado el pasado día 1 dice lo siguiente: «El Consejo de Ministros ha sido informado por el Ministro de Asuntos Exteriores de los gravísimos sucesos que tuvieron lugar ayer en la sede de la Embajada de España en Guatemala.

Al producirse la ocupación de la Embajada por un grupo de asaltantes guatemaltecos, y ante la convicción expresada por el Embajador, señor Cajal, de que era posible resolver el problema de forma pacífica, el señor Oreja se puso en contacto inmediatamente con el Ministro de Relaciones Exteriores de aquel país para instar la no intervención de la Policía en el interior de nuestra representación diplomática y la salvaguarda de las vidas de quienes se hallaban en ella.

Por su parte, el Embajador de España intentó repetidas veces entrar en contacto con el Ministro de Relaciones Exteriores, con el Ministro del Interior y con el Director General de la Policía, sin obtener respuesta alguna a sus reiteradas peticiones de que la Fuerza Pública se retirara de las inmediaciones de la Embajada y se abstuviera de intervenir. Ante esta situación, el señor Cajal se dirigió personalmente al mando de las fuerzas que rodeaban la sede de la Embajada, reiterándole dicha petición y comunicándole que los ocupantes aceptaban abandonarla pacíficamente en compañía del propio Embajador.

A pesar de estas apremiantes gestiones, la Policía irrumpió en la sede de la Embajada, violentando puertas, techos y dependencias interiores y forzando la puerta del despacho del Embajador, donde se habían refugiado los ocupantes de la Embajada y sus rehenes.

En ese instante, uno de los dichos ocupantes

lanzó una bomba de gasolina que provocó un incendio. Según las noticias de que se dispone en este momento, parece que sólo logró salvarse nuestro Embajador, que se arrojó entre las llamas en el mismo momento de producirse la explosión.»

Es un comunicado hecho en la mañana del día 1, y sigue diciendo: «El Gobierno, al considerar con profundo dolor e indignación estos dramáticos acontecimientos, en los que han perdido la vida, además de treinta y seis guatemaltecos, entre ellos dos secretarías de nuestra representación, el primer secretario de la Embajada, don Jaime Ruiz del Arbol, y el canciller don Felipe Sáenz, expresa su más firme condena por la conducta seguida por las autoridades de Guatemala, que en violación de las más elementales normas del Derecho Internacional y del deber de todo Estado de garantizar la inmunidad e inviolabilidad de las representaciones diplomáticas extranjeras y de su personal, permitieron que fuerzas de Seguridad bajo su mando asaltaran brutalmente la sede diplomática española.

El Gobierno español, al mismo tiempo que reitera su más firme condena a toda forma de terrorismo, además de exigir que con las garantías necesarias se proceda a un total esclarecimiento de los hechos que identifique a los responsables de la violación de la Misión diplomática, ha adoptado el acuerdo, en tanto dichas exigencias no se cumplan por el Gobierno de aquella República, con plena satisfacción para el Gobierno español, de proceder a la ruptura de relaciones diplomáticas con Guatemala, con cuyo pueblo España se siente tan estrechamente unido por tantos y tan profundos vínculos.

El Gobierno de Venezuela ha aceptado hacerse cargo de la protección de los intereses españoles en Guatemala, sin perjuicio de las medidas que respecto a la seguridad y repatriación voluntaria de nuestros ciudadanos adopte el Gobierno español.

Por el Ministerio de Asuntos Exteriores se hace llegar al Gobierno de Guatemala la correspondiente comunicación del acuerdo adoptado hoy en Consejo de Ministros.»

Por consiguiente, hubo un comunicado oficial elaborado por el Consejo de Ministros y, al mismo tiempo, una nota verbal dirigida a la Embajada declarando formalmente la ruptura de relaciones.

La inviolabilidad de las Misiones diplomáticas y de su personal es ciertamente imprescindible para el desempeño de la función diplomática y por ello ha constituido el más antiguo y esencial de los privilegios que integran el «status» diplomático.

Definida como una inmunidad a la coerción, como la exclusión de toda medida de coacción o violencia, la inviolabilidad significa esencialmente —lo saben SS. SS.— dos cosas: de una parte, que el Estado receptor debe abstenerse de toda acción coercitiva respecto a la Misión diplomática y hacia todos sus miembros, y ese mismo Estado está obligado a conceder a la Misión y a su personal una protección específica, a fin de garantizar su seguridad. La organización del Estado receptor tiene, por consiguiente, una doble dimensión: la de hacer y la de no hacer. De no hacer, es decir, el deber de abstenerse de utilizar la fuerza contra la Misión o sus miembros. Obligación de hacer, es decir, el deber que corresponde al Estado receptor de proteger la vida de los agentes diplomáticos y la integridad de los locales.

Estos preceptos pertenecen al derecho consuetudinario y son universalmente admitidos y respetados. Están consagrados específicamente en el Convenio de Viena sobre relaciones diplomáticas, en el que formaron parte tanto España como Guatemala. El artículo 22 del Convenio establece con toda claridad que los locales de la Misión diplomática son inviolables y que los agentes del Estado receptor no podrán penetrar en ella sin consentimiento del Jefe de la Misión.

Es evidente que por parte del Jefe de la Misión y por parte del Gobierno español, no sólo no existió una autorización o un consentimiento para que interviniese la policía, sino que se formuló insistentemente, como he dicho repetidas veces, la petición de que se retirase de las inmediaciones la policía. La petición era de que se retirase de las inmediaciones y que en ningún caso, por supuesto, penetrase en el edificio.

La petición, como saben, había sido angustiosamente repetida por el Embajador señor Cajal cuando, en contra de todas las normas internacionales, las fuerzas de seguridad procedieron al asalto de la sede diplomática española.

No existe, por tanto, la menor duda sobre la ilegalidad de la acción perpetrada por la policía cumpliendo órdenes de su Gobierno, que trata

ahora de paliar su responsabilidad alegando una petición de auxilio por parte del Embajador.

Una vez decidida la ruptura de relaciones, ya hemos visto cuáles han sido los pasos y las medidas que se han ido adoptando desde entonces y cómo el Gobierno de Venezuela está ya actuando en la protección de los intereses españoles, habiéndose levantado ya la bandera venezolana en el edificio de nuestra Misión diplomática.

Ciertamente, señores y señores Diputados, pocas veces se habrá producido ante un hecho de esta gravedad una mayor coincidencia de criterios en su análisis, en el que ha habido una total unanimidad en la condena. La barbarie del acto de Guatemala no podía tener ninguna justificación y ha recibido esta repulsa general de todos los países, especialmente de los iberoamericanos.

Puedo asegurar que ni una sola opinión, ni un solo medio informativo, ante las declaraciones que se han producido en el mundo, ha apoyado, justificado o disculpado siquiera, esta brutal acción de la policía guatemalteca.

Igualmente condenatoria ha sido la actitud de los organismos internacionales, desde el Consejo de Europa al Secretario General de las Naciones Unidas, destacando de manera muy especial la de las organizaciones regionales de Iberoamérica, y de manera muy expresa quiero hacer patente la solidaridad inmediata de los países del Pacto Andino.

A mi llamada a varios miembros de este Pacto Andino, la respuesta fue unánime. Entre ellos establecieron en seguida un sistema de consulta, hicieron un comunicado en los términos más firmes, claros y tajantes, y ésta es una de las pruebas de que, efectivamente, esa dimensión de la política exterior, y particularmente esta coincidencia con los países del Pacto Andino, supone, por parte de éstos, un tipo de reacción que se produce ante acontecimientos tan desgraciados como éstos. Aparte de las declaraciones de los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, se ha elaborado por un grupo de trabajo de once países un proyecto de resolución, que ha sido aprobado, y en el que ha intervenido el observador permanente de España hace pocas horas, agradeciendo al Consejo su pronunciamiento y destacando la trascendencia, que mencionaba hace un instante, del hecho de que la Organiza-

ción de Estados Americanos se haya ocupado de un caso que involucra a un país que no es miembro de pleno derecho de la OEA.

Por último, señoras y señores Diputados, quisiera reiterar en este momento una vez más a SS. SS. que, como bien conocen, una de las dimensiones esenciales de nuestra política exterior está en nuestras relaciones especiales con los pueblos de Iberoamérica, con quienes estamos unidos por tantos vínculos, históricos y culturales, de tan honda raigambre. Sobre estos lazos de lengua, sobre estos lazos de civilización, hemos querido articular una política; una política basada en la más estrecha y fecunda cooperación, y en una acción solidaria para trabajar juntos en la transformación de unas estructuras internacionales justas, en la defensa de unos derechos humanos y en la defensa de la justicia y de la libertad.

El Gobierno ha instrumentado con los países de Iberoamérica una política asentada en unas realidades vivas, operantes, que ha conseguido ya unos resultados alentadores, a los que me he referido en varias sesiones en esta Comisión, incluso en una sesión monográfica en la que nos referimos a la política de España respecto a Iberoamérica; pero a veces se trata también de una política que, respetando escrupulosamente el principio de la no injerencia en los asuntos internos, es una política que, al mismo tiempo también, proclama y defiende que sólo las instituciones auténticamente representativas son el instrumento adecuado para garantizar el ejercicio de la libertad y el respeto de los derechos humanos, que es el objetivo final último y el presupuesto básico de todo sistema democrático.

Este es, precisamente, el sentido de la declaración de Quito suscrita en aquella ciudad el pasado 11 de agosto por el Presidente del Gobierno, por los Presidentes de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Venezuela y por el Ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, donde expresan estos responsables de la política de estos países la esperanza de que continúe en el continente el proceso de institucionalización de la libertad y la democracia, y reiteran su propósito de seguir alentando los esfuerzos tendentes a conseguir este objetivo en América Latina, convencidos de que la lucha por la democracia vigoriza nuestra propia vida institucional, estimula el reconocimiento de las libertades en el

continente y contribuye de una forma eficaz a organizar la forma política más deseable para la realización de los anhelos de justicia social de los pueblos.

De esta forma el impulso dado a la cooperación económica, el impulso que se da a la cooperación comercial y a la tecnológica, viene a complementarse en los ejes de nuestra política exterior con unos planteamientos políticos en torno a los ideales proclamados por esos países del Pacto Andino, que tienen cada día una mayor acogida entre los pueblos de ese continente, que apoyan y defienden la evolución hacia formas políticas que garanticen el ejercicio de la libertad y que reconozcan el imperio del derecho.

En esta nueva política con Iberoamérica, frente al fortalecimiento de nuestras relaciones con Méjico y demás países del Pacto Andino, ha ocupado lugar preferente en la atención del Gobierno el tema de Centroamérica.

Bien conocen lo que ha sido la política de España respecto a Nicaragua, como ya he explicado en varias sesiones informativas en esta Comisión, y dentro de Centroamérica, hemos seguido a lo largo de estos meses con particular interés la evolución de los acontecimientos en Guatemala y El Salvador, que nos preocupaban de una forma especial y nos siguen preocupando. Por ello enviamos a Guatemala como Embajador a un profesional prestigioso, cuyas altas cualidades eran bien conocidas por haber trabajado conmigo como Director General de la Oficina de Información Diplomática. Precisamente en vista de las informaciones recibidas a lo largo de los últimos meses, tanto de Guatemala como de otros países de Centroamérica, decidí convocar en Panamá a todos nuestros Embajadores en la zona, con quienes celebré, el pasado 30 de septiembre y el 1.º de octubre, una amplia sesión de trabajo, a la que concurrieron, concretamente, los Embajadores en Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

A mediados del pasado mes de enero, en vista de que la situación nos seguía pareciendo cada vez más preocupante, decidí enviar, justamente, al Director General de Política Exterior para Iberoamérica, don Pedro Bermejo, a visitar El Salvador y Guatemala. La evolución de los acontecimientos en estas dos repúblicas ha venido a demostrar que eran fundadas nuestras inquietudes, y las informaciones que recibíamos

de nuestras Embajadas aconsejaban esa valoración de la situación.

Alguna vez se ha hablado de por qué teníamos esas relaciones y manteníamos las Embajadas en países que no respetan los principios democráticos. Entendemos que el que exista un momento difícil en un país no quiere decir en modo alguno que debamos cerrar nuestras Embajadas y retirar nuestros Embajadores, como algunas personas pretenden. En los últimos años, no menos de veinte Embajadores de distintos países y un gran número de diplomáticos han perdido la vida en el ejercicio de sus funciones, muchos de ellos en Iberoamérica, no sólo en Guatemala; ha sido asesinado el Embajador de Estados Unidos, en 1968, y el Embajador de la República Federal Alemana, en 1970. Sin embargo, este asalto generalizado a Embajadas, de carácter reciente, que pone en peligro la vida y la seguridad de los diplomáticos, no puede impedir que la diplomacia siga desempeñando su función de paz, negociación y protección de los intereses de España. Por eso teníamos Embajada en Guatemala, como en tantos otros países, y la tenemos en toda Iberoamérica, donde residen varios cientos de miles de españoles, por cuya seguridad e intereses tenemos la obligación de velar.

Es precisamente en esos momentos difíciles por los que están atravesando los países americanos cuando más necesaria es esa presencia, aunque a veces, como ha sucedido en Guatemala, arriesguen y pierdan su vida en el noble empeño de defender los intereses de España y de amparar y proteger a los españoles donde quiera que se encuentren.

Señoras y señores Diputados, después de este análisis de los hechos en relación con la Embajada de Guatemala, paso a exponer a SS. SS. los acontecimientos en El Salvador, a partir del pasado martes, día 5. El martes, sobre las seis de la tarde, hora española, un comando integrado por una veintena de hombres y seis mujeres de la organización de extrema izquierda Ligas Populares 28 de Febrero, ocuparon nuestra Embajada en la capital salvadoreña y tomaron como rehenes a 14 personas, entre las cuales figuran nuestro Embajador —que acababa de volver de Guatemala—, don Víctor Sánchez Mesas; el Consejero de la Embajada, don Carlos Romero; el Canciller y demás personal administrativo de la representación, así como algunos

súbditos españoles y salvadoreños que se hallaban en ese momento realizando una gestión en la Cancillería.

Las reivindicaciones de los ocupantes se centran fundamentalmente en la petición de que sean liberados doce militantes. Ha habido distintas propuestas en diversos momentos, pero la primera fue de doce militantes de varias organizaciones revolucionarias salvadoreñas.

Estos hechos se enmarcan, Señorías, dentro de esa situación que bien conocen, una situación fluida y compleja por la que atraviesa en este momento El Salvador, en su esfuerzo por avanzar por el difícil camino de la transición de un régimen autoritario a un régimen democrático.

Si me permiten SS. SS., intentaré, muy brevemente, dar unas rápidas pinceladas y describir la situación de El Salvador en los últimos cuatro meses.

Como bien saben, el 15 de octubre de 1979 es derrocada la dictadura militar que presidía el General Humberto Romero. Ocupa el poder un grupo de jóvenes militares que se declaran progresistas, y su objetivo es constituir un gobierno que pudiese aglutinar a las diversas fuerzas sociales en presencia y que estuviera capacitado para hacer frente a la situación tanto de las violencias de la extrema derecha como de la extrema izquierda. Se constituye una Junta Revolucionaria de Gobierno, en la que participan los Coroneles Majano y Gutiérrez en representación de los militares y tres elementos civiles representantes de la Democracia Cristiana, de la Socialdemocracia y del empresariado. La Junta es aceptada, aunque con algunos reparos, por el Partido Comunista y es rechazada por los grupos de guerrilleros izquierdistas. Por encima de dicha Junta se constituye un Consejo Permanente de las Fuerzas Armadas, compuesto por una treintena de jóvenes militares, jóvenes oficiales. Su función, en cierto sentido, se puede sintetizar en una palabra: el guardián último del proceso político. Este Consejo está presidido por el Coronel Guerra, que asume, además, las funciones de Subsecretario del Interior.

Pronto se advierte un antagonismo entre los elementos civiles de la Junta y la Comisión Permanente de las Fuerzas Armadas, fundamentalmente en relación con las reformas a realizar, el ritmo de las mismas y el modo de repeler la violencia izquierdista. Los elementos civiles de la Junta presentan un programa y un ultimátum a

las Fuerzas Armadas, que éstas no aceptan. Dimite el Gobierno, dimite el elemento civil de la Junta. Durante una semana el país es regido por los miembros militares de la Junta, así como por el Ministro de Defensa, que es el único miembro del Gabinete no dimisionario. La Democracia Cristiana presenta una propuesta para participar en la formación de gobierno. Exigen para dicha formación un programa de 18 puntos, en el que se recogen, prácticamente, las mismas condiciones que habían sido exigidas por los civiles de la Junta en su ultimátum a los miembros del Consejo Permanente de las Fuerzas Armadas. Estas condiciones van desde la oposición a que miembros del empresariado formen parte de la Junta hasta la nacionalización de la banca, comercio exterior del algodón, café, azúcar, productos del mar y la puesta en práctica de una reforma agraria.

La Comisión de las Fuerzas Armadas acepta los 18 puntos; se constituye una nueva Junta, en la que participan los dos militares de la anterior, Coroneles Majano y Gutiérrez, y tres civiles, de los que dos son democristianos y uno independiente, que se constituyen a partir del 4 de enero último. Paralelamente a la constitución de esta nueva Junta —que lo hace el 4 de enero último—, la militancia izquierdista revolucionaria concluye un pacto en el que participan las más importantes formaciones políticas, entre ellas las Ligas Populares 28 de Febrero, que es la más radicalizada de todas las formaciones que se reúnen en este Comité Coordinador por el Movimiento de la Unidad Popular, que es el nombre que recibe la coordinadora que agrupa a estas distintas fuerzas. La prueba de fuego de esta coordinadora es la manifestación gigantesca que tiene lugar el 22 de enero, en la que participan cien mil personas. Tengan en cuenta la extensión de El Salvador. Mientras las Fuerzas de Orden Público permanecen inactivas, hay un hostigamiento procedente de elementos no determinados de la ultraderecha, y se producen 48 muertos y más de 100 heridos.

Se advierte así la confusión de la situación. De una parte, un proceso de cambio con resistencia de ciertos elementos militares y la oposición más violenta de las fuerzas de la ultraderecha, y de otra parte, el proceso revolucionario, que no admite un régimen de cambio pacífico. Esta creciente bipolarización que se produce en estos últimos días amenaza con desencadenar la

guerra civil. Esta es la situación que estamos viviendo prácticamente desde el día 8 ó 10 de enero hasta el momento presente. Las Ligas Revolucionarias Populares 28 de Febrero, el LP-28, aparecen erigidas como punta de lanza de la izquierda, ocupan los locales de la Democracia Cristiana el pasado 28 de enero, donde siguen manteniendo 17 rehenes, realizando la ocupación pacífica e indefinidamente. Ocupan, posteriormente, la Embajada de España; e inmediatamente después, otro grupo, éste de treinta, toma el Ministerio de Educación, manteniendo como rehenes a unas mil personas, incluyendo al Ministro de Educación, a su esposa y al Subsecretario del Departamento.

Pasemos ahora a dar una relación sucinta de los hechos respecto de la toma de la Embajada de España.

Nada más tenerse conocimiento de los hechos de la ocupación de la Embajada —que se produce a las seis de la tarde del día 5— se inicia inmediatamente por parte del Ministerio una amplia serie de gestiones con objeto de garantizar la vida de las personas secuestradas en la Embajada y la protección de los bienes de la misma, y, por otra parte, con el fin de lograr una solución pacífica que permita poner fin cuanto antes a la ocupación.

Mi primera reacción fue llamar inmediatamente por teléfono a las oficinas de la representación, y el Director de Centroamérica, que estaba conmigo, conversó con una de las ocupantes, que le comunicó las reivindicaciones del comando, a la vez que nos dio cuenta de las personas secuestradas. Inmediatamente pasé a hablar con el Embajador, señor Sánchez Mesas, quien nos confirmó que, tanto él como el personal a sus órdenes y personas detenidas, estaban en buen estado de salud. Concluida esta conversación, intenté ponerme en contacto con el Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, pero estaba fuera del país. Pedí hablar con la Jefatura del Estado, que es la Junta colegiada de los cinco miembros, y hablé con uno de ellos, expresándole nuestra gran preocupación por la situación. Me dio plenas garantías de que no intervendría la Policía salvadoreña y de que se intentaría buscar una solución pacífica a la ocupación. Al cabo de cuatro o cinco horas me volvió a llamar directamente este miembro de la Junta para reiterarme que en ningún caso se emplearía la violencia para reducir a los ocupan-

tes, subrayándome de forma especial que me mantendría informado de cualquier novedad que pudiera producirse.

Por otra parte, informé telefónicamente de los acontecimientos a los representantes de España, tanto en Naciones Unidas como en la Organización de Estados Americanos, para que informaran directamente a los respectivos Secretarios Generales. Los dos Secretarios Generales, en conversación con nuestros representantes, se mostraron dispuestos a hacer cuanto estuviera en sus manos para contribuir a una solución rápida y pacífica de la situación. El Secretario General de la OEA, señor Orfila, me llamaba unas horas después para decirme que seguía la situación minuto a minuto, que estaba en estrecho contacto con El Salvador, que la Organización de Estados Americanos estaba con España y que informaría al órgano político de la Organización. Nuestro Embajador en Naciones Unidas me dio cuenta de las gestiones que había hecho el Secretario General, señor Waldheim, a través del representante de Naciones Unidas en El Salvador, quien asimismo había recibido seguridad de los miembros de la Junta en el mismo sentido que me había hecho a mí el miembro de la Junta de El Salvador.

A última hora de la tarde del martes me puse en contacto con el Director General de Política para Iberoamérica, que estaba en Guatemala, ordenándole el traslado inmediato a El Salvador. Se trasladó en una avioneta para seguir directamente la evolución de los acontecimientos y establecer los primeros contactos personales con las primeras autoridades salvadoreñas. Me informó el Director General de Política Exterior que antes de salir para El Salvador había podido comunicar con el Ministro de Relaciones Exteriores de aquel país, que se encontraba en Guatemala, a quien reiteró nuestra posición y petición de que se resolviera pacíficamente la ocupación. El Canciller de El Salvador, señor Chaves, estaba girando una visita a todos los países de Centroamérica; acababa de estar en Costa Rica y en aquel momento se encontraba en Guatemala.

Junto con el Director General de Política Exterior, ordené el traslado de uno de los consejeros de nuestra Embajada en Colombia, que conoce bien el área, para ayudarle en las gestiones a realizar. A medianoche, el Canciller salvadoreño, señor Chaves, me telefoneó desde Gua-

temala para dar nuevas seguridades en el sentido de que no intervendrían las Fuerzas de Orden Público, que intentaría buscar una solución pacífica a la situación, y que su principal preocupación era la salvaguardia de la vida de las personas que se encontraban en la Embajada y la protección de los bienes de la misma.

En el día de ayer, miércoles, hablé en diversas ocasiones con nuestro Embajador en El Salvador; nuevamente con el miembro de la Junta y con el Ministro de Defensa ante la ausencia del Canciller, expresándoles nuestra preocupación (sobre todo dada la facilidad de acceso que tiene la Embajada, en la que entran y salen fundamentalmente periodistas y cámaras de televisión), el temor que sentía de que pudieran entrar individuos pertenecientes a grupos incontrolados que pudieran provocar una grave situación. Prometió tomar todas las medidas adecuadas.

Por fin, el Director General de Política Exterior ha tenido diversas conversaciones a lo largo de toda la noche. Yo he tenido siete u ocho conversaciones a lo largo de la noche, desde la una a las siete de la mañana, con el señor Bermejo, que me ha ido dando cuenta de las gestiones que ha realizado a lo largo de la noche, que era la tarde salvadoreña.

Ha tenido unas conversaciones en presencia de los Embajadores de Italia, Ecuador y Méjico con unos responsables de la organización Ligas Populares 18 de Febrero en la sede de la Comisión de Derechos Humanos.

A última hora de la tarde, hacia las once o doce de la noche, se trasladaron a la Embajada, pudieron entrar en la Embajada de España tanto el señor Bermejo, como los tres Embajadores de Italia, Ecuador y Méjico. Tuvieron una conversación con nuestro Embajador, con miembros de la Misión y los españoles que allí se encuentran, y están pendientes de que en el día de hoy en torno a las ocho de la mañana, hora salvadoreña —tres de la tarde, hora española—, sigan los contactos iniciados ayer.

Yo espero que Sus Señorías sabrán disculparme de que yo mantenga una reserva respecto de los términos en que se están produciendo, porque es un tema muy serio el que tenemos y me obliga a la reserva que comprenderán y me pedirán Sus Señorías que yo guarde.

Estos son, señoras y señores Diputados, los hechos. Pido disculpas por lo largo de la exposi-

ción, pero me parecía inevitable, aunque muchas cosas o prácticamente todas son conocidas. Pero quería ordenarlas y exponer las reacciones que en cada momento ha tenido el Gobierno ante estos sucesos, cuál ha sido la actitud del Gobierno, la actitud de los funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuál ha sido el comportamiento de nuestro Embajador.

No quisiera terminar estas palabras sin rendir un último homenaje a Jaime Ruiz del Arbol, primer Secretario de nuestra Embajada en Guatemala, que había sabido ganarse el afecto del pueblo guatemalteco y de los españoles residentes, que ha desempeñado su misión de una manera realmente ejemplar en defensa de los intereses de su país, hasta llegar al sacrificio de su propia vida.

Quiero testimoniar también mi afecto y emoción a nuestro Embajador Máximo Cajal, que se está reponiendo lentamente de las graves quemaduras que sufrió en el asalto a la Embajada, y no quiero dejar de expresar mi solidaridad en estos momentos difíciles a nuestros compañeros de la Embajada de San Salvador, a todos los miembros de la misión, a todos los españoles que allí se encuentran y una mención especial a los diplomáticos españoles, a estos abnegados y eficaces funcionarios que sirven a España en el exterior, que se esfuerzan por proteger los intereses de nuestros compatriotas en estas condiciones, ciertamente, a veces muy difíciles. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro de Asuntos Exteriores, por su información.

Tal y como habíamos convenido, vamos a abrir un primer turno de Portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios, para lo cual yo pediría a los Grupos Parlamentarios que quieran intervenir que lo soliciten. *(Pausa.)* Señor Areilza, por Coalición Democrática; señor Ballesteros, por el Grupo Comunista; señor Alvarez de Miranda, por el Grupo Centrista; señor Piñar, por el Grupo Mixto; señor Martínez, por el Grupo Socialista. ¿Algún otro Grupo desea intervenir? *(Pausa.)* Por el Grupo Socialistas de Cataluña, el señor Busquets. ¿Algún otro grupo más? *(Pausa.)* Tiene la palabra el señor Piñar, en nombre del Grupo Mixto.

El señor PIÑAR LOPEZ: No era yo el que había pedido la palabra primeramente.

El señor PRESIDENTE: Solemos hacerlo por turnos, diríamos, de menor a mayor.

El señor PIÑAR LOPEZ: Soy el menor.

El señor PRESIDENTE: Exacto.

El señor PIÑAR LOPEZ: En primer lugar, quiero manifestar, en nombre propio y creo que también, aun cuando nuestro voto no sea ponderado, del Grupo Mixto, nuestro sentimiento, nuestro pesar, nuestra condolencia por los graves sucesos tanto de Guatemala como de San Salvador, y muy especialmente por el fallecimiento del diplomático señor Ruiz del Arbol y de todos los españoles que han fallecido en tan luctuoso suceso.

Pero dicho esto, y comentando la información del señor Ministro, me permito, con toda brevedad, hacer, casi telegráficamente, las siguientes apostillas:

Todo esto arranca de que se ha conculcado un «status» diplomático. Ese «status» diplomático supone una inviolabilidad de la sede y de las personas que integran la sede, la Misión. Ahora bien, convendría saber si la Misión diplomática concreta se ha comportado siempre como tal Misión diplomática, porque solamente el exacto cumplimiento de la Misión diplomática puede exigir esa inviolabilidad por parte de la zona, o del país, o de la nación donde esa representación diplomática está acreditada. En segundo término, la inviolabilidad creo que obliga a todos, es decir también a los llamados «ocupantes», supuestos campesinos —creo que la información revela que no todos eran campesinos, y los campesinos eran una minoría del grupo asaltante que participaba en el asalto y ocupación de la Embajada—, personas afectas a movimientos subversivos claramente revolucionarios y guerrilleros.

Nadie, por consiguiente, puede negar ese «status» diplomático —por supuesto, no el Gobierno— pero tampoco, con fines políticos —vamos a llamarles «políticos»— otros grupos que actúan en el país. Hay un precedente clarísimo: el de la utilización de los rehenes diplomáticos en Teherán, problema todavía no solucionado, y es el caso subsiguiente y esclarecedor de la ocupación —y ya se ha dicho que para tener rehenes; lo ha dicho el señor Ministro— de nuestra Embajada en San Salvador.

Por otra parte, no se trata de una ocupación que podría ser tolerable si fuese de carácter pacífico, por gentes no armadas, que van a formular la protesta, sino que el grupo ocupante de la Embajada de España en Guatemala, según ha dicho el señor Ministro, era un grupo armado, armado con armas blancas y con armas de fuego.

Por consiguiente, si el «status» diplomático exige la inviolabilidad, me parece absolutamente lógico —no digo que haya ocurrido— que, desde la Embajada, quizá tenía por lógica y obligación el Jefe de la Misión reclamar la presencia de la Policía frente a esa violación grave y hecha prioritariamente por parte de un grupo armado; de forma que podrá ser o no cierta la llamada de protección a la Policía, pero creo que el Embajador, Jefe de la Misión, estaba obligado a pedir precisamente esa protección policial para salvaguardar el «status» diplomático y el principio de inviolabilidad, y no tratar de convertir una Misión diplomática, cuya misión es otra muy distinta, en un órgano o instrumento de presión para otros fines cerca del Gobierno o del régimen del país en que esa Embajada está acreditada.

Se ha exigido —y me parece muy bien; felicito al Gobierno— del Gobierno de Guatemala una investigación sobre lo ocurrido y la imposición de las sanciones correspondientes a quienes se hayan precipitado en el cumplimiento de su función o hayan practicado abuso de celo, con consecuencias tan graves, que todos lamentamos; pero acaso, también, ¿no sería conveniente que por este Congreso —y hay un precedente de investigación de la Policía española— se nombrase una Comisión para que investigue si de verdad, de verdad, nuestras Misiones diplomáticas en Centroamérica, y concretamente la de Guatemala, sola, exclusivamente servía a los fines propios de una Misión diplomática?

Está clarísimo que en San Salvador se ha repetido el fenómeno, luego esto quiere decir que se trata de un plan; no son hechos aislados. Toda el área de Centroamérica está sujeta a una auténtica convulsión subversiva, cuyo foco, posiblemente, radica en Cuba; movimientos de carácter revolucionario y guerrillero que no tratan de imponer sus ideas por procedimientos pacíficos, sino por la violencia armada, con la práctica del terror, que han ganado una batalla en Nicaragua, posiblemente pueden ganarla en

San Salvador y posiblemente puedan ganarla también en Guatemala.

¿Hasta qué punto las Embajadas españolas, de alguna forma, pueden contribuir directa o indirectamente, no cumpliendo con su misión, a derrocar los regímenes donde están acreditadas?

Si hace falta inviolabilidad por parte del Gobierno del país donde está la residencia de la Embajada, también hace falta que la Embajada respete al Gobierno y por consiguiente cumpla sola y estrictamente la función para la que se encuentra acreditada.

Creo, por otra parte, que en el repudio que ha hecho el Gobierno español de esa conducta (yo también participo de esa condena) por excesos o imprudencia de la Policía, habría que haber hecho antes un repudio total a las ocupaciones de las Embajadas de España, de cualquier Embajada, por parte de un grupo político, cualesquiera que sean los fines, por nobilísimos que fueren, que en este caso para mí no lo son, por supuesto, de política interior.

Se puede utilizar todo menos una Embajada que está amparada, como ha dicho el señor Ministro, de esa inviolabilidad que la Embajada es la primera que tiene que respetar.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Piñar.

Tiene la palabra el representante del Grupo Socialistas de Cataluña, señor Busquets.

El señor BUSQUETS BRAGULAT: Señor Presidente, señor Ministro, señores Diputados, voy a ser muy breve; voy a hacer dos preguntas muy puntuales.

La primera es sobre por qué se ha recurrido a la OEA y no a la ONU, o por qué además de recurrir a la OEA no se ha recurrido a la ONU.

La segunda pregunta es sobre cuáles eran las relaciones del Gobierno español con Guatemala hasta el día de los sucesos, porque he leído en un periódico, de la seriedad de «El País», que estas relaciones eran hasta aquel día muy buenas, que se hablaba de régimen amigo. Si esto es así, quizá debería asumirse una cuota de responsabilidad, hacerse algo de autocrítica derivada de una aplicación a ultranza de esta doctrina Estrada que agradecemos al señor Ministro que nos haya explicado muy brevemente esta vez y agradecemos también que como la vez que nos

habló de Nicaragua no nos haya hablado de su teoría de los derechos humanos electivos, que no compartimos, lo mismo que no compartimos la doctrina Estrada.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Busquets. Tiene la palabra el señor Areilza, del Grupo de Coalición Democrática.

El señor AREILZA Y MARTINEZ DE RODAS: Señor Presidente, quiero, en primer lugar, agradecer profundamente al señor Ministro esta exhaustiva y minuciosa relación que nos ha hecho, no solamente de los sucesos de Guatemala y El Salvador, sino también de las medidas múltiples en diversas vertientes que ha tomado el Gobierno en estos dos lamentables episodios y que, por supuesto, nosotros aprobamos plenamente en todos sus detalles.

En la relación exhaustiva del informe de la tragedia sucedida dentro de la Embajada de España en Guatemala me ha parecido notar una laguna que no sé si se podrá llenar, porque no sé si quedan supervivientes suficientes para aclarar ese testimonio, que es si realmente la «masacre» ocurrida se debió exclusivamente a la explosión de una botella de gasolina lanzada por uno de los que estaban refugiados, o la «masacre» también tuvo, en alguna parte, como resultado las medidas violentas de represión que pudieran haber tomado los asaltantes de la policía guatemalteca. Creo que es un punto matizado importante que podría servir realmente para establecer la auténtica responsabilidad del alcance de la tragedia.

En lo que se refiere a las Embajadas, por mi larga experiencia de Embajador, debo decir que creo que la definición perfecta de una Embajada es que es un instrumento técnico; es decir, tiene un carácter técnico y un carácter instrumental.

Las Embajadas no deben ser nunca, ni son en general, un instrumento de acción política interior en ningún país. Son un canal de comunicación que se abre entre los Gobiernos y entre los países; esos canales de comunicación son más útiles y más importantes cuanto más difícil, más grave y más arriesgada es la tensión interior de ese país o la tensión exterior que pudiera tener España con ese país. Por consiguiente, las Embajadas son realmente los últimos canales que quedan abiertos para poderse entender cuando los momentos son de desentendimiento.

Así es como yo concibo y como creo que el Ministerio ha concebido siempre las Embajadas de España.

No puedo creer que ninguna Embajada española en los actuales momentos, digo bien, ninguna, esté en estos momentos dirigida, encaminada u orientada para interferir en ninguna acción que pudiera significar una injerencia en los asuntos interiores de un país, aunque sea un país amigo, aunque sea un país cercano, aunque sea un país hispanoamericano.

Yo no sé, en este momento, cómo ha podido ponerse en duda este principio que me parece que ha sido el fundamental de toda la acción exterior de España desde hace muchos años.

Por consiguiente, pienso que en lo que se refiere a las Embajadas de Guatemala y El Salvador los Embajadores que allí están presentes (a los que conozco personalmente y respeto profundamente) habrán hecho lo que debe hacer todo buen Embajador en un momento de grave tensión interior de ese país, en un momento de dificultad, en un momento prerrevolucionario, en un momento de golpe de Estado, en un momento de transición, que es mantenerse con las ventanas y todos los que podíamos llamar servicios de antena exterior para percibir y captar hasta el último detalle de lo que está ocurriendo, cosa nada fácil, pero sin tomar nunca posiciones de partido o de interés en una determinada dirección, sea cual fuera; porque nosotros, en nuestra política exterior, no debemos tener regímenes amigos ni enemigos, sino relaciones buenas, lo mejor posibles, con todas las naciones del mundo, sea cual sea su régimen, su ideología y su respeto o no a los derechos humanos, que lamentamos profundamente, pero que no debe servir para darnos un plus de simpatía, amistad o enemistad con los países con los que mantenemos relaciones diplomáticas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Ballesteros, del Grupo Comunista.

El señor BALLESTEROS PULIDO: En nombre de mi Grupo agradezco al señor Ministro la información que nos ha dado.

Mi Grupo Parlamentario, nada más conocerse los sucesos de la Embajada española en Guatemala, solicitó esta reunión y nos conside-

ramos satisfechos con las explicaciones minuciosas que ha dado el señor Oreja.

A raíz de los sucesos nosotros expresamos ya públicamente nuestra más enérgica condena por el bárbaro atentado a que ha sido sometida la representación española en Guatemala y por la muerte de esos ocupantes. En ese sentido sólo me queda ratificar esta declaración y expresar el pésame a los familiares de los españoles que allí han muerto, muy en concreto del señor Ruiz del Arbol, y de todos los demás. Igualmente desde aquí también me parece natural expresar el pésame a los familiares de los guatemaltecos que murieron en ese bárbaro atropello.

Estimamos que las medidas que ha tomado el Gobierno español en estos lamentables sucesos han sido medidas adecuadas, medidas enérgicas —era necesaria esa energía— y al mismo tiempo medidas inteligentes para intentar evitar el drama, que no ha sido posible en el caso de Guatemala y que confiamos que va a ser posible evitarlo en el caso de El Salvador. En ese aspecto nosotros felicitamos al Gobierno por esas medidas, así como por la ruptura de relaciones diplomáticas con Guatemala.

Cabía preguntarse las razones por las cuales, al temerse lógicamente por la vida del señor Cajal —cuyo comportamiento en todo momento ha sido de una alta dignidad y valentía—, cabría preguntarse, insisto, al temerse por la vida del señor Cajal, la razón de que haya ido a la Embajada americana y no a la Embajada de Venezuela o a la de algún otro país del Pacto Andino, o México o de algún otro país de América Latina.

Naturalmente, a este Diputado no se le escapa que, en la situación de Guatemala, quizá el único terreno que reúne garantías para salvar una vida pueda ser la Embajada de los Estados Unidos de América; pero, en todo caso, salvo esta situación, que puede ser real, creemos que hubiese sido mejor que un país hermano de América Latina fuese el que hubiese acogido al señor Cajal.

Estimamos que un suceso como el de la Embajada de Guatemala está en íntima, en estrecha relación con la situación de este país, con la situación que existe en una serie de países de América Latina en que los derechos humanos, las libertades democráticas, son despreciadas, machacadas, violadas día a día. Basta, en el caso de Guatemala, traer aquí los datos facilita-

dos por Amnistía Internacional que señalan cómo desde 1966 ha habido 20.000 muertos; cómo en los 18 últimos meses 2.000 personas han sido asesinadas por razones políticas en Guatemala y que informes recibidos desde Guatemala hablan de 234 cadáveres con señales de violencia en los seis días posteriores, del 27 de agosto al 1 de septiembre, en que estuvo la Delegación de Amnistía Internacional en Guatemala. Una situación como ésta está en el origen de sucesos como los que hemos vivido todos los españoles en la Embajada de Guatemala, porque, de una forma o de otra, todos nos hemos sentido partícipes de ese drama.

Yo creo que esto pone más sobre el tapete el insistir en lo que ha señalado el señor Oreja, en la necesidad de que la política española en general, y muy en particular hacia América Latina, favorable a los derechos humanos, a las libertades, pueda tener iniciativas, siempre naturalmente respetando la independencia de cada país y el no entrometernos en otros Estados, pero iniciativas que favorezcan, en todo momento, el establecimiento de las libertades democráticas y el respeto de los derechos humanos en toda América Latina.

Creemos que dictaduras de la ferocidad como la de Guatemala originan comportamientos que no pueden ser aprobados, como la ocupación de una Embajada, pero sería incomprensible el que se analizasen esas cosas sin ver el contexto en que viven los naturales de ese país. Comportamientos que, repito, no pueden ser aprobados, porque la práctica, que desgraciadamente parece que está poniéndose de moda en el mundo, de ocupaciones de Embajadas es una práctica que está claro que no conduce a favorecer la democracia, la distensión y la paz, sino que trae complicaciones muy serias.

Nosotros queremos rechazar, de una manera firme, la petición —me ha parecido que era una petición, no estoy seguro— que ha hecho en esta Comisión un Diputado de que se cree una Comisión para investigar si de verdad nuestras Embajadas, y en especial la de Guatemala, se limitan a su finalidad diplomática o tienen otras actividades. Nosotros rechazamos totalmente cualquier idea en ese sentido. Nos parece que carece del más mínimo fundamento y que es querer complicar las cuestiones y querer echar una sombra sobre la dignidad moral y patriótica de esos diplomáticos españoles que han muerto,

que han sufrido ese drama en estos días y que todavía lo están sufriendo.

Finalmente, quiero señalar que nuestro Grupo presenta a esta Comisión una moción para que sea sometida a votación, que me permito leer a continuación:

«La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de las Cortes Españolas, ante los trágicos sucesos ocurridos en Guatemala, que han supuesto el ataque a nuestra Embajada en el citado país y la muerte de (el número exacto de las personas no lo recuerdo ahora) tantas personas, así como ante la ocupación de nuestra Embajada en El Salvador, declara:

Primero, que condena de la manera más enérgica el ataque y destrucción de la Embajada española en Guatemala y el asesinato de quienes estaban dentro, negación de las más elementales normas de la civilización y del Derecho Internacional.

Segundo, que apoya la decisión del Gobierno español de romper las relaciones diplomáticas con el Gobierno de Guatemala, así como cuantas medidas tomó para evitar la tragedia.

Tercero, que se felicita por el comportamiento del Embajador español en Guatemala, señor Cajal, tendente en todo momento a defender la dignidad nacional española y a salvar todas las vidas de los ocupantes.

Cuarto, que expresa su posición contraria a los métodos de ocupaciones de Embajadas, por muy legítimos que puedan ser los móviles.

Quinto, que manifiesta su preocupación por el mantenimiento en América Latina de regímenes que no respetan los derechos humanos, expresando su confianza en que pronto logren los pueblos hermanos de América Latina regímenes plenamente democráticos, e insta al Gobierno español a que oriente su actividad en los organismos internacionales a este fin.»

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ballesteros. Yo le rogaría que si es la intención del Grupo Comunista, como parece anunciarlo en estos momentos, presentar un texto de resolución después de la comunicación que ha hecho el señor Ministro de Asuntos Exteriores, a lo cual le da perfecto derecho nuestro Reglamento del Congreso, según el precepto del artículo 143, que tan pronto como

terminemos la sesión informativa abramos entonces un plazo de tiempo, que podemos agotar, ya que el Reglamento habla de 30 minutos, pero podemos dejar un plazo de tiempo por si otros Grupos Parlamentarios tuvieran intención también de presentar otro texto de resolución. De todas maneras, esta Mesa entiende que el Grupo Parlamentario Comunista tiene intención de presentar un texto de resolución; pero abriremos un plazo de tiempo que luego vamos a convenir conjuntamente, por si algún otro Grupo Parlamentario quisiera presentar otro texto de resolución o incluso endosar la propia resolución del Grupo Parlamentario Comunista.

Tiene la palabra el señor Martínez, por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso.

El señor MARTINEZ MARTINEZ: Señor Presidente, señor Ministro, señoras y señores Diputados, en primer lugar, y antes de entrar en materia, quiero lamentar que una concurrencia de factores hayan intervenido y hayan impedido que este tema se tratase de un modo inmediato, con la solemnidad que entendemos nosotros corresponde a su importancia real; es decir, en el Pleno de la Cámara. Había posibilidad reglamentaria para ello y hubiera bastado con tratar por el procedimiento de urgencia las preguntas presentadas sobre el tema por el Grupo Parlamentario Socialista y firmadas por nuestro compañero Felipe González y por mi mismo. Concurrencia de factores, por un lado, digamos, asumiendo, desde luego, la mejor voluntad, la precipitación comunista, pidiendo que se convocara la Comisión, entendiendo nosotros que el señor Ministro se ha agarrado como a un clavo ardiendo a esta posibilidad para venir a la Comisión y que el tema no se viera, por lo pronto, en el Pleno, y la actuación del señor Fraga, portavoz de Coalición Democrática en la Junta de Portavoces, en la que, efectivamente, basta con que un grupo se oponga a que se trate por el procedimiento de urgencia una pregunta, para introducirla en el Pleno más próximo.

Todo ello ha concurrido, efectivamente, a que acontecimientos de la entidad del que aquí estamos discutiendo y que suponen la primera ruptura —entendemos nosotros— de relaciones en la historia de las relaciones entre España y América Latina, la primera ruptura de relaciones entre España y un país de aquella comunidad, no vaya al próximo Pleno. Yo creo que se

ha tratado de impedir, de alguna manera, que tenga el máximo eco y se ha escamoteado un debate en el que, quizá, los nervios de algunos han pensado que fácilmente se podría desbordar de los acontecimientos de Guatemala, para convertirse en un análisis serio y apretado de la política del Gobierno, con relación a América Latina, por encima, o más allá, de las grandes afirmaciones de principios.

Queremos señalar que esto se ha conseguido sólo temporalmente, sólo parcialmente, y que además, quizá, la cosa se vuelva como un «boomerang», ya que hoy, en caliente los incidentes de Guatemala, hubieran sido, necesariamente, el meollo fundamental del debate en el Pleno. Pero dentro de unos meses, cuando el procedimiento reglamentario en curso permita que pasen las preguntas al Pleno del Congreso, el tema de Guatemala será, efectivamente, la introducción, el detonante, para ese gran debate que nos parece indispensable.

Desde luego a él nos comprometemos desde aquí y a él queda emplazado el señor Ministro, que esperamos nosotros siga en funciones, a pesar de los largos meses que dura el procedimiento reglamentario hasta que una pregunta presentada llega.

Entrando directamente en materia, y en lo que a Guatemala respecta, en su día, habrá que pedir responsabilidad a unos y a otros, habrá que esclarecer, habrá que, sobre todo, explicar cuál ha sido y cuál está siendo la protección a los españoles en aquel país. Hemos tomado buena nota de las explicaciones del señor Ministro, donde él mismo ha manifestado que poco nuevo podía decir, pero tiene gran importancia, porque es la ratificación por la voz más autorizada de una serie de realidades y actuaciones importantes.

Yo creo, señor Ministro, y cree nuestro Grupo, que los acontecimientos de Guatemala (y de antemano señalemos nosotros, como lo hemos hecho por escrito, la repulsa que siente nuestro Grupo, los socialistas, por las ocupaciones de Embajadas) entendemos que no es el método de ninguna manera para plantear reivindicaciones, ni aun en aquellos países en los que esas reivindicaciones no tienen cauces fáciles. Dejemos también salvada la diferencia, que yo creo que ha quedado muy clara, en el planteamiento del señor Ministro, entre los acontecimientos de Guatemala, donde ha tenido

—entiendo— el acierto de no llamar terroristas a los ocupantes más que cuando hablaba en voz de las autoridades guatemaltecas. En el caso de El Salvador, efectivamente, si que se trata de un grupo organizado, armado, etc., caso que no era el de Guatemala; pero yo creo que los acontecimientos que estamos analizando dejan al descubierto dos cosas que es muy preciso tener en cuenta: en primer lugar, las insuficiencias caracterizadas del servicio exterior de España. En segundo lugar, la naturaleza real de algunos regímenes «amigos» —y lo pongo entre comillas— en América Latina y, desde luego, a ese respecto, la ambigüedad real de la política de derechos humanos del Gobierno y, en particular, del señor Oreja.

Insuficiencia en el servicio exterior conocida, creo yo, de casi todos nosotros, o por lo menos de los que, de una u otra manera, hemos tenido la oportunidad de ver cómo funcionan, de qué manera tan precaria funcionan casi todas nuestras misiones; dificultades o insuficiencias (de seguro que en alguna de ellas va a estar más que de acuerdo el señor Ministro con nosotros) materiales y dificultades de personal.

Dificultades materiales porque es verdad que en las Embajadas de España, en las misiones, en los consulados, se entra como Perico por su casa (y la prueba son los acontecimientos de El Salvador), y eso no es posible en la situación actual. Hay una serie de medidas que adoptar, medidas que la tecnología moderna pone a nuestro alcance, pero que, efectivamente, suponen un esfuerzo presupuestario que todos tenemos que asumir.

Insuficiencia de personal también, porque el señor Ministro sabe muy bien hasta qué punto nos apanamos con poco; hasta qué punto los funcionarios tienen que cubrir diversas tareas, algunas de las cuales, probablemente, para las que no han sido preparados. Cada cual tiene que hacer un poco de todo. El señor Ministro sabe también mejor que yo hasta qué punto hay que recurrir al empleo de personal autóctono para tareas importantes, incluso para algunas que, por su carácter eminentemente reservado, deberían ser realizadas por personal español. Y yo creo que es un compromiso que tenemos todos que contraer, el de mejorar e ir cubriendo estas insuficiencias.

Insuficiencias, por otra parte, señor Ministro, que nosotros entendemos que han sido hereda-

das de una época anterior en que el servicio diplomático (y que me perdonen algunos de los destacados representantes de ese servicio diplomático en esa época anterior) era un adorno, era un aparato de propaganda, era un aparato de dar coba, y, efectivamente, para dar coba y para propaganda no hacía falta mucho más que lo que se tenía, y desgraciadamente se sigue teniendo, aunque entiendo yo que han cambiado los objetivos de ese servicio.

Es necesaria una transformación conceptual, estructural, operacional y presupuestaria, y, quizá, a ese nivel, las dudas que puedan acuciarnos a nosotros es si realmente los mismos hombres están en condiciones de llevar a cabo la transformación y, sobre todo, la gestión de esta política transformada en lo conceptual, lo operacional y lo estructural. Por otra parte, la naturaleza de estos regímenes amigos también se pone de manifiesto con estos acontecimientos. Lamento que se haya ido el señor Piñar, pero tengo que decir que si en algún momento me viera obligado a hacer un elogio del señor Piñar, diría que se trata de un hombre que es fiel a sus principios y a sus amigos, cosa que no todo el mundo ni todos los grupos políticos que actúan en el país pueden decir. Ahora al señor Piñar, desde luego, lo que sí se le aplica es la afirmación del saber popular «Dime con quién andas y te diré quién eres». Quería señalar que al Gobierno también se le aplica esa afirmación del saber popular, por eso hay que tener mucho cuidado de con quién se anda, para que no confunda ese pueblo del saber popular quién eres.

Decir que a nosotros no nos ha causado sorpresa (y yo me temo que al señor Ministro tampoco) el que este incidente se produzca en Guatemala, no es por casualidad, porque Guatemala —lo sabe muy bien el señor Ministro— es un caso extremo de fascismo, de barbarie, de genocidio pionero, porque, antes de que en ningún otro país se siguieran los caminos que se han seguido luego —y podemos citar a Uruguay y algunos otros—, ha sido en Guatemala donde se ha puesto en marcha un sistema de eliminación científica de todos aquellos que podían suponer una voz clamando por la justicia y una alternativa de democracia. Y, desde luego, la condición de asesinos de los mandos policiales guatemaltecos —y se ha citado aquí el nombre del señor Chopina— no puede ser desconocida

por parte del Gobierno español. La prueba de que no es desconocida, es que, haciéndose eco, desde luego, o coincidiendo con la enorme preocupación que nos embargaba, han sacado al Embajador de un hospital donde corría, efectivamente, inmenso peligro, y yo me alegro de que el señor Ministro, en una afirmación que va a constar en acta, haya dicho que estaba en grave riesgo la vida del Embajador. Efectivamente, ha habido que sacarle de aquel hospital para que no corra la misma suerte que el último testigo guatemalteco que quedaba de aquellos acontecimientos.

Esos regímenes, señor Ministro, eran, efectivamente, buenos amigos para la dictadura, pero son impresentables hoy como amigos de la democracia española, y nosotros hemos vivido durante muchos años situaciones en que el franquismo era un amigo incómodo para países democráticos, y afirmamos que la democracia española tiene que resultar incómoda para los regímenes fascistas, y queremos que lo sea, y afirmamos que hemos sido poco incómodos.

La actuación de los representantes diplomáticos de España tiene que ser diferente, coherente, y yo no estoy de acuerdo con las afirmaciones del señor Areilza, porque entiendo que es indispensable que aparezcamos como más amigos de aquellos con los que más identificados nos sentimos, y menos amigos de aquellos con los que menos identificados nos sentimos. Respecto a la actuación de los diplomáticos, podría preguntársele al señor Areilza si cuando él era Embajador en París hacía o no política con algunos de los que nos sentamos en estos bancos.

No es fácil, señor Oreja, asumir amigos como el régimen de Guatemala, y ahí es donde nosotros queremos hacer dos preguntas, o dejar plasmadas dos preguntas muy claras al señor Oreja. ¿Cuándo dejaron de ser amigos los fascistas de Guatemala del señor Suárez y del señor Oreja? ¿Cuándo? ¿Son o no son amigos del Gobierno que encabeza el señor Suárez, y cuya labor exterior lleva el señor Oreja, los Gobiernos de Honduras, Haití, Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina? Esas son las preguntas a las que hay que contestar ante España y ante los pueblos de América Latina, de los que si decimos, afirmamos y repetimos que son hermanos, tenemos que sentir solidariamente sus privaciones y, fundamentalmente, la privación de liber-

tad que sienten los pueblos de los países a que me acabo de referir.

Concretando, señor Oreja, dos cuestiones también muy precisas: ruptura de relaciones diplomáticas reclamada por los socialistas y, por tanto, apoyada esta medida del Gobierno por los socialistas; pero, ¿qué significación tiene? ¿Qué alcance real tiene lo de ruptura de relaciones?

Segundo planteamiento muy claro para ahora y para juzgar al Gobierno en las semanas que vienen: ¿Qué condiciones son las que ponemos al restablecimiento de relaciones diplomáticas? ¿La ruptura, señor Oreja, es un gesto o es una actuación política seria y de alcance? ¿Qué alcance va a tener en lo económico? ¿Qué alcance real va a tener en los medios en que España se mueve y a España se la respeta y se la escucha, en la OEA, Estados Unidos, Europa, y organismos como el Banco Mundial? Y de manera muy precisa, porque yo entiendo que su Ministerio no puede ignorarlo, ¿qué consecuencias va a tener en lo que se refiere a algún que otro becario guatemalteco que está hoy en nuestro país, a costa del presupuesto del Estado, es decir, a costa de los impuestos que paga usted y yo y que pagamos todos los españoles, becarios que son oficiales del ejército o de las fuerzas de represión, porque yo no puedo decir fuerzas de orden en lo que se refiere a Guatemala? ¿Qué se va a hacer de los oficiales guatemaltecos, entre otros becarios, que hay hoy día en España preparándose? ¿Preparándose para qué? ¿Preparándose a quemar Embajadas?

¿Y el restablecimiento, señor Oreja? Restablecimiento de las relaciones diplomáticas al que yo creo que todos debemos aspirar, ¿en qué condiciones? Nosotros vamos a decir cuáles son las condiciones que vemos los socialistas: reconocimiento por parte de las autoridades guatemaltecas de la verdad de los hechos y reconocimiento uniforme y unánime, no que salga uno por aquí diciendo que sí, y otro por allí diciendo que no; reconocimiento unánime, público e internacional. Cese, por otra parte, de la campaña inverosímil de injurias y difamación que se está llevando a cabo contra el Embajador de España en Guatemala, y que es una campaña que nosotros afirmamos que nos toca a nuestro país y que nos toca a nuestro pueblo; en las acusaciones que se están vertiendo contra el señor Cajal se está insultando y acusando a nuestro pueblo.

Tercer tema, indemnizaciones. Indemnizaciones al Estado español. ¿Qué indemnizaciones? Indemnizaciones a las víctimas españolas, a las diplomáticas y las no diplomáticas y, desde luego, indemnizaciones a los guatemaltecos, a los empleados guatemaltecos de la Embajada, de los que nosotros entendemos que se ha hablado poco, demasiado poco, y a los que desde aquí mandamos nuestro pésame en la misma voz que lo hacemos a las familias de los diplomáticos, del personal y visitantes españoles que estaban allí en aquel momento.

No podemos olvidarnos, señor Oreja, de que el ex Canciller muerto ha sido recibido a bombo y platillo por su Gobierno cuando vino a España como Ministro de Asuntos Exteriores de esa misma dictadura con la que hoy rompemos, y que a visitar esa misma dictadura se envió al Jefe del Estado, quedando hoy, para los que tenemos memoria, en una situación deteriorada y que, desde luego, nos da pie para plantear, como lo hemos planteado en otras ocasiones, la gravísima preocupación que nos producen determinados viajes, decididos por el Gobierno, a misiones difíciles, a las que se manda al Jefe del Estado porque quizá no habría otra persona que pudiera ir a cumplir esas misiones.

Una condición más, señor Oreja, para el restablecimiento de relaciones: cambios políticos. ¿Se trata de una ruptura con el Gobierno o se trata de una ruptura con el régimen de Guatemala?

Yo termino diciendo, señor Ministro, señoras y señores Diputados, que ojalá que la tragedia de la Embajada española de Guatemala sirva para confirmar a los pueblos de España y, sobre todo, a los pueblos de Latinoamérica, y sobre todo a los pueblos de Latinoamérica que sufren —como hemos sufrido nosotros durante cuarenta años— la privación de derechos humanos, la privación de libertades, que sirva para señalar, para indicar incuestionablemente que España ha empezado a cambiar de verdad, y que ellos también van a beneficiarse realmente del cambio.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez. Dígame, por favor, si tiene ese Grupo intención de presentar algún texto de resolución, o ha pensado algo al respecto.

El señor MARTINEZ MARTINEZ: No habíamos pensado presentar un texto de resolu-

ción, pero entendemos que cualquiera que se presente tiene posibilidad de ser enmendable.

El señor PRESIDENTE: Sin duda. Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Centrista, señor Alvarez de Miranda.

El señor ALVAREZ DE MIRANDA Y TORRES: Señor Presidente, quiero iniciar mis palabras en nombre de Unión de Centro Democrático agradeciendo al señor Ministro el informe detallado, completo y satisfactorio que ha hecho ante esta Comisión.

Quiero también, ante todo, llevar a cabo algo realmente importante para nosotros, los de Unión de Centro Democrático, que es dar el pésame, pésame sentido, a la familia diplomática española en la persona de Jaime Ruiz del Arbol, del Canciller, de los funcionarios españoles y ocupantes —ocupantes en su mayoría campesinos, a pesar de lo que se diga, y tenemos testimonios absolutamente fidedignos de que fue así— de la Embajada española.

Tuve ocasión, el pasado mes de agosto, de ser recibido por Jaime Ruiz del Arbol en la misión que tuve el honor de efectuar en Guatemala con Amnesty International. Quiero decir que Jaime Ruiz del Arbol era un funcionario ejemplar. Me recibió como Diputado de este Parlamento y, consiguientemente, para mí tiene la memoria de aquellos días un recuerdo muy especial, porque cuando representantes de otras embajadas, concretamente de las embajadas de los miembros que me acompañaban en la delegación, nos recibieron con un cierto recelo y un cierto temor, la Embajada de España, el representante de la Embajada de España, recibió, dígame lo que se quiera, a los miembros de la delegación de Amnesty International con las puertas abiertas, nos dio toda la protección y todo el calor que podíamos recibir. Por eso, para mí, el recuerdo de Jaime Ruiz del Arbol en este momento quiero decir sinceramente que me emociona por el comportamiento que tuvo con nosotros en aquellos días difíciles.

Quiero también subrayar algo que, de alguna manera, ha quedado en duda o ha querido ponerse en duda, no solamente desde Guatemala, sino que estoy viendo que también desde algunas voces interesadas en el propio interior de España: la posible falta de corrección en la actuación del Embajador Cajal. Me parece que

eso es absolutamente intolerable y a lo que tenemos que salir al paso, apoyando de una forma decidida —como aquí se ha expuesto reiteradamente por los grupos parlamentarios— nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro testimonio indudable, no solamente de afecto, sino absolutamente de solidaridad, con el Embajador Cajal, que se ha comportado en estos acontecimientos con la dignidad que requería su representación, y que ha hecho, indudablemente, que el nombre de España haya quedado en Guatemala a la altura que se debía.

Quiero decir que los incidentes ocurridos en la Embajada de España en Guatemala han sido repudiados por las fuerzas políticas y sindicales de Guatemala, por todas las fuerzas democráticas, acusando realmente al Gobierno, al Ministro del Interior —siniestro personaje al que tuve iba a decir el honor de conocer, no fue tal, sino la oportunidad de conocer en mi visita a esa República hermana, al Coronel Chopina y a los jefes de los policías que asaltaron la Embajada. Pero el pueblo guatemalteco, las organizaciones políticas, el Frente Democrático, la CNT, el CENUS, todos los partidos políticos democráticos, han hecho declaraciones públicas en las que condenan el bárbaro atropello de las fuerzas de represión de Guatemala y se lamentan y ponen de manifiesto la solidaridad al pueblo guatemalteco con el pueblo español.

De manera que creemos sinceramente que los hechos no van a crear un conflicto entre el pueblo de Guatemala y el pueblo español, sino todo lo contrario, el pueblo de Guatemala sentirá muy en lo vivo que en este momento haya sido la Embajada de España el objeto del ataque de unas fuerzas de represión, que son las que están actuando desde hace tantos años por impedir el restablecimiento de los derechos humanos en aquella República hermana.

Decía el señor Ministro —y yo creo que eso es uno de los puntos claves de la petición que el Gobierno español debe exigir al Gobierno guatemalteco— que se debe hacer la claridad sobre lo sucedido, porque lo terrible, lo absurdo, realmente lo inicuo que está ocurriendo en todos los asesinatos y en todas las acciones represivas que está dirigiendo desde fuerzas policiales el Gobierno del General Lucas, es que jamás se hace luz sobre lo que ocurre, y nos tememos muy mucho que si esa luz no se hace en otras ocasiones no se va a hacer tampoco en esta

ocasión. Y éstas no son afirmaciones gratuitas que puede hacer este Diputado; yo las escuché de labios del propio Vicepresidente de la República de Guatemala, doctor Villa Grankramel, quien nos reconoció de una forma expresa que él tenía el convencimiento de que el Gobierno del General Lucas no ponía de su parte los medios mínimamente normales para poder esclarecer los asesinatos políticos que se daban en personas líderes de la oposición, líderes sindicales.

De manera que si el propio Vicepresidente de la República lo reconoce, si los parlamentarios guatemaltecos que asistieron a la conferencia interparlamentaria de Caracas también votaron unánimemente la condena, no solamente de los asesinatos, sino de la inanidad, la falta de interés que por parte de las autoridades guatemaltecas se pone para el esclarecimiento de cualquier atentado de orden político, creemos que el Gobierno español debe poner mucho énfasis y acudir a las instituciones que sean necesarias para esclarecer de una vez para siempre lo sucedido en el ataque a nuestra Embajada.

Creo que la moción presentada por el Partido Comunista —este Grupo Parlamentario también tenía la intención y el proyecto de haber hecho una moción parecida— puede servirnos a todos como punto de partida para estudiarla, para apoyarla, para, en definitiva, presentarla ante esta Comisión y que sea testimonio vivo de lo que nosotros en este sentido pensamos.

Pienso también, señor Presidente, que quizá haya otra forma de actuar, que deseo proponer en la próxima reunión de la Junta directiva de la Unión Interparlamentaria, que sería la de que el Grupo Español de la Unión Interparlamentaria —si así lo acuerda en la Junta directiva— se dirija a esta Unión Interparlamentaria proponiendo que la Comisión de Investigación de Derechos Humanos, que ya sigue actuando en casos como Uruguay, Chile y Argentina, se extienda también a Guatemala, dado que allí las condiciones nos han demostrado hasta la saciedad que no existe de ninguna manera el respeto a estos derechos humanos.

Gracias, señor Ministro, por la información; gracias, señores Diputados.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alvarez de Miranda, por su intervención.

El señor Ministro tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Oreja Aguirre): Muchas gracias, señores Diputados. Voy a intentar sucintamente contestar a las preguntas o planteamientos que se han hecho. Entiendo que más que preguntas son en su mayor parte declaraciones en relación con el tema. Sin embargo, hay algunas que no puedo pasar por alto, porque ciertamente me han preocupado algunas de las declaraciones que aquí se han hecho en los turnos de intervención.

En primer lugar —y lamento que no se encuentre aquí el Diputado señor Piñar—, me parece que esas presunciones dejadas en el aire son absolutamente inadmisibles. Creo que es muy grave en temas de esta naturaleza el dejar flotando declaraciones como la que él ha hecho. En este sentido, quiero decir que asumo íntegramente las responsabilidades del comportamiento del Embajador, señor Cajal, con quien me siento totalmente identificado en toda su actuación a lo largo de la misión que ejemplarmente ha cumplido en Guatemala.

Ciertamente, a veces también a alguno de los señores Diputados se le olvida que el señor Cajal es un miembro del Servicio Diplomático, que está ejerciendo su misión, y no basta, sin embargo, hacer ese elogio aislado como si fuese un hecho distinto, sino que si hubiera excepciones serían otras, pero ése es el comportamiento, ése es el tono de los funcionarios diplomáticos que hoy prestan sus servicios en el exterior. Y quiero decir que él ha desempeñado una tarea no solamente informativa, sino una tarea de protección de los derechos, de los intereses de las personas españolas, viajando, con riesgo, ciertamente, de su propia vida, por el territorio del Estado de Guatemala, y esto es digno del mayor elogio, y porque él ha desempeñado como debe desempeñarse la función diplomática, que es precisamente con ese sentido de humanidad, de protección del interés nacional y de protección de los derechos de los españoles que allí se encuentran, visitando a unos y otros, no cabe, por haber cumplido de esta forma su misión, dejar en el aire ese tipo de presunciones.

Créanme, señoras y señores Diputados, que me ha dolido profundamente escuchar de un miembro de esta Cámara una declaración de este tipo en un momento tan dramático en que todos los españoles, como otro señor Diputado ha mencionado, hemos vivido, puesto que todos

los españoles nos hemos sentido identificados con las personas que representaban y defendían el interés nacional en aquel país.

Ciertamente, ha mencionado el Diputado señor Piñar que la condena no puede dirigirse únicamente a las fuerzas de Seguridad, a las fuerzas de Policía, y así lo he mencionado expresamente en mi exposición, y así lo han recogido también otros señores Diputados. He dicho claramente que condenaba con toda firmeza la ocupación de la Embajada porque, por muy legítimos que sean los derechos que defienden los propios ocupantes, ello, ciertamente, no justifica la agresión, como es, en suma, la ocupación del local de la Embajada, que tiene por definición, por acuerdo y por Derecho internacional una inviolabilidad y una inmunidad.

La misión de un diplomático y de una Embajada no es ciertamente el derrocamiento de los regímenes de Gobierno del lugar donde esté acreditado, sino que es, como ha dicho muy acertadamente el Diputado señor Areilza, el servir de cauce, el servir de camino para las relaciones entre los Estados.

El establecimiento y la existencia de unas relaciones diplomáticas y la existencia de una Misión diplomática no significa el reconocimiento de las situaciones políticas que en él existan. Un viejo diplomático inglés decía una frase que constituye ya un principio clásico en los manuales de Derecho diplomático: «Reconocer no es aprobar.» El que España mantenga relaciones diplomáticas con muchos países no significa que apruebe los regímenes políticos de esos países.

Ha preguntado el Diputado señor Busquets por qué se ha reunido la Organización de Estados Americanos y no la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de Estados Americanos es, en primer lugar, el foro propio de ámbito regional donde, tratándose de un tema que se produce en América, parece más apropiado que llevarlo a la Organización de las Naciones Unidas. Es, incluso, una práctica de organización universal el que los conflictos puedan resolverse previamente y puedan discutirse en el ámbito regional correspondiente, y a eso precisamente se debe el tipo de procedimiento que se da y que está abierto en el ámbito de las organizaciones regionales. En el ámbito de las Naciones Unidas una reunión de esta naturaleza sólo podría hacerse al amparo del capítulo 7.º

de la Carta; es decir, cuando se trata de un peligro para la paz y la seguridad, y, ciertamente, una situación como ésta puede poner en peligro la paz y la seguridad internacionales; no es que quiera rechazarlo, pero creo que el ámbito propio para la reunión era el que se realizara en el marco de la Organización de Estados Americanos. La peculiaridad y la dificultad era que la petición venía de un Estado no miembro, de un Estado que tiene una condición simplemente de observador. Sin embargo, debo decir que en la primera conversación con los Cancilleres del Pacto Andino la respuesta fue inmediata, la acogida instantánea, y por eso fue posible propiciar ese tipo de reunión, amparados por aquellos países con los cuales, ciertamente, existe una mayor homologación en nuestros regímenes políticos, y por eso, aunque tengamos relaciones con más de 115 países de la Comunidad internacional, hay algunos con los cuales el tipo de identidad que tenemos, por la homologación de nuestros regímenes políticos, permite que en un caso de esta naturaleza pueda apelarse a ellos, y la respuesta de los países del Pacto Andino debe hacerse patente ante esta Comisión y ante esta Cámara. Realmente, merece toda nuestra gratitud por la prontitud y el desinterés con que fue hecha, en respuesta justamente a esta identidad de nuestros propósitos, y hay que dejar bien claro que sólo instituciones auténticamente representativas son las que permiten el respeto de los derechos y de la libertad.

En la intervención del señor Areilza hay una pregunta, y es si la masacre se debió a la explosión de la botella de gasolina. Casualmente, en los escasos minutos que he estado esta mañana con el Embajador señor Cajal, como tampoco tenía yo una precisión exacta sobre el tema, he querido pedirle una aclaración sobre ello. Es difícil saber con exactitud lo que ocurrió en esos momentos porque no hay más que una persona que pueda contarlo, que es él. Tampoco se encuentra en las condiciones óptimas para poder hablar y, realmente, por la facilidad que él me ha dado, me he permitido entrar hoy en un tema que hubiera querido no tocar, pero es que él realmente tenía casi necesidad de explicarme lo que había ocurrido.

Los sucesos se producen de tal forma que al avanzar las fuerzas de Policía, como mencionaba antes, van retrocediendo los ocupantes del edificio; suben al piso superior y entran en el

despacho del Embajador (la parte de abajo es la oficina, lo que se llama la Cancillería, y el despacho del Embajador está en el piso superior) y quedan reducidas allí, que es un espacio entre los 12 y los 14 metros cuadrados, las treinta y tantas personas, 39 ó 40, pues tampoco se sabe exactamente las que estaban en ese instante. Al avanzar, llegan a derribar la puerta, y, en el momento en que están derribando la puerta, junto a la cual se encontraba el Embajador (porque estaba gritando a las fuerzas de Policía diciéndoles que no avanzasen, por la masacre que podría producirse, porque era plenamente consciente de lo que podía pasar), en ese instante, uno de los ocupantes tira una bomba de gasolina y esa bomba de gasolina no explota. Se vierte la gasolina, y el Embajador Cajal, cuando otra persona tira una cerilla encendida, la apaga con el pie, y otro de los ocupantes saca otra bomba, la tira y entonces se produce la explosión y el incendio.

Coincide esto con la entrada de la Policía y, en ese instante, cuando aquello está lleno de humo y con las llamas avanzando, por puro instinto, se tira a las llamas (porque la puerta ya no existía) y hecho una llama humana se tira al suelo para intentar apagar las llamas y cae rodando por las escaleras. Según su impresión, los únicos que disparan son los que están dentro del despacho y no puede asegurar que haya disparos desde fuera. Lo que hay es que penetran con las hachas.

Esa es la versión que yo he recibido y ésta es la que transmito, aunque ciertamente esto es sólo uno de los datos, pero, de todas maneras, no altera los sucesos en la forma en cómo se han producido en esos momentos.

A este respecto, y también en relación con lo que ha dicho el señor Areilza cuando se refería a que las Embajadas son instrumentos técnicos, quiero hacer hincapié en que una cosa es que pueda haber unas amistades o afinidades en los regímenes políticos y otra cosa es que la misión diplomática, que la función diplomática sea una función esencialmente técnica, es un canal de comunicación. Y, ciertamente, salvo, naturalmente, en los casos dramáticos como éstos en que no hay más solución que la de la ruptura —que cuesta mucho llevar a cabo porque, como recordará el señor Areilza, hay la vieja frase de Talleyrand que decía que a los Embajadores se les retira cuando más falta hacen—, justamente

en los momentos de crisis, es necesaria la presencia del Embajador. En momentos dramáticos es necesaria e imprescindible la ruptura, que es el gesto más grave. Efectivamente, es la primera vez que España rompe relaciones con un país de América Latina y es la primera vez, probablemente, en el siglo que España rompe relaciones diplomáticas con un país. Sin embargo, nunca se había producido tampoco, en la historia diplomática, una situación de la gravedad de la que desgraciadamente hemos presenciado.

Sobre las preguntas del señor Ballesteros, entiendo que hay una muy concreta, que es la de por qué el Embajador Cajal se refugió en la Embajada de Estados Unidos. Yo estoy seguro de que el señor Ballesteros estará de acuerdo conmigo en que, entre otras cosas, no había mucho tiempo para dudar; había que ir a la más próxima: la Embajada de Estados Unidos. El Embajador Frank Ortiz era un amigo personal del Embajador Cajal, como lo es de muchos diplomáticos, porque fue el que ejerció las funciones de responsable del tema ibérico en el Departamento de Estado. Yo inmediatamente le llamé por teléfono (y no pude encontrarle) porque tenía una relación personal. Quería conocer los datos y cuando no pude hablar con la Embajada ni con nadie apelé a él. Y apelaba a él esencialmente en razón de una relación personal que yo tenía con él, como debía tenerla el señor Cajal.

Quiero destacar la asistencia tanto del Embajador de Venezuela como del de los Estados Unidos, que son los primeros que acudieron allí y que le prestaron todo tipo de asistencia y son los que le acompañaron anoche hasta el aeropuerto con sus coches y con su protección, para poder entrar en el avión.

En relación con la intervención larga y confusa —no difusa— del señor Martínez, sabe él muy bien que estoy dispuesto siempre a acudir a la Comisión o al Pleno. Creo que en muchas ocasiones hemos tenido ocasión de hablar de los temas de política exterior con gran profundidad y extensión, y hemos dedicado muchas horas a estos temas porque responden a lo que desde el principio anuncié ya desde la anterior Legislatura: a la necesidad del ejercicio de un control de la política exterior. Y también sabe muy bien el señor Martínez, y lo he dicho, que debe ser auténticamente una política de Estado.

Ha hecho algunas afirmaciones, después de

mencionar la repulsa de la ocupación de las Embajadas, de lamentar los sucesos, que se refieren a la insuficiencia del servicio exterior y a algo que yo no le he entendido muy bien, que es una ambigüedad que me atribuye a título personal. Yo creo que el señor Martínez tiene un juicio excesivo sobre mí. Yo quisiera decirle que yo lo que hago es ejecutar la política del Gobierno. La política exterior la define el Gobierno, y es al Ministro de Asuntos Exteriores al que corresponde, con todos los miembros de aquella casa, ejecutar esa política.

Bien sabe el señor Martínez que, ciertamente, uno de los principios de nuestra política exterior es este de la defensa de los Derechos Humanos; lo hemos afirmado en distintas ocasiones, tanto en el marco de Estrasburgo como con los compromisos concretos que hemos asumido a través de la firma de distintos convenios internacionales que obligan específicamente a que el nivel de compromiso asumido por España en materia de derechos humanos no sea puramente declarativo, sino que tienen consecuencias concretas en la medida en que de las palabras y declaraciones se pasa a unos convenios en los que se reconoce una legitimidad o legitimación de las actuaciones del individuo que suponen, en definitiva, reconocer que el individuo es un sujeto de Derecho Internacional. Posición que, como sabe bien el señor Martínez, hemos mantenido tanto en el marco del Consejo de Europa como en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y con unos tipos de acuerdos y de adhesión a las cláusulas facultativas y a los protocolos anejos al Pacto de Derechos Civiles y Políticos que solamente siete Estados más de la Comunidad han asumido. Y eso tiene unas consecuencias precisas y concretas que van mucho más allá de las palabras.

Habla de la insuficiencia del servicio exterior. Ciertamente hay una insuficiencia de personal. Conste que en este momento no soy diplomático, sino político; por tanto, quiero decir que la eficacia del servicio diplomático suple muchas veces esa insuficiencia; se está demostrando en numerosos supuestos y se ve además la entrega que tiene este servicio. Cuando el otro día tenía que enviar a El Salvador a alguien, recibí cuatro llamadas de Secretarios de Embajada desde distintos puntos de Europa y América que habían estado en tiempos en la Embajada de El Salvador y que quisieron inmediatamente ponerse a mi disposición y salir en el acto. Elegí a uno de

ellos que tenía unas especiales condiciones, pero otros cuatro concretamente se pusieron al servicio del Ministerio para poder desempeñar esta tarea en un momento ciertamente difícil, como todos saben.

La insuficiencia del personal, por otra parte, se está intentando salvar. Lo que no se puede es, de la noche a la mañana, transformar un número de funcionarios que es ciertamente muy escaso, puesto que no es mayor al número de 600, cuando hay países como, por ejemplo, Italia que tiene aproximadamente dos veces y media más del número de diplomáticos que nosotros tenemos en estos momentos.

Por eso se ha hecho una ampliación de plantillas y por eso desde hace tres años hemos ampliado en 100 la plantilla de los diplomáticos; se están celebrando en este momento oposiciones donde van más de 30 plazas, y así se está haciendo todos los años. Pero no podemos de la noche a la mañana abrir los cauces y hacer una oposición con una entrada de 300 ó 400 personas, porque se perdería el nivel de competencia de las personas que ingresen en el servicio diplomático.

En cuanto al personal contratado, se da esa misma insuficiencia, ya que la acción exterior es muy distinta de la que era durante los cuarenta años anteriores, y es necesario, progresivamente, llevar a cabo ese tipo de ampliación del personal contratado. Pero no realiza el personal contratado aquellas funciones específicas encomendadas a los miembros del servicio diplomático, ni siquiera el cifrado y descifrado de telegramas.

Decía el señor Martínez que hacía falta una transformación conceptual. El concepto de lo que es la acción exterior es la que aparece definida por el Gobierno y contrastada en el Parlamento, y el diplomático lo que no tiene que hacer es inventar los principios en que se inspira una acción exterior, sino ejecutarla. Yo no diría que de una forma mecánica, porque no es posible, ya que los seres humanos tienen que aportar algo más, pero su función es mucho más técnica que la de la definición de la política exterior.

Por otra parte, al preguntar si eran los mismos hombres, quiero aclarar al señor Martínez que en este momento, que yo recuerde, no hay un solo Embajador en el mismo destino que ocupaba hace cuatro años. Me parece que lo que no pedirá Su Señoría es que se disuelva el

Cuerpo Diplomático, a lo que yo sí sería ciertamente sensible, como lo serían también algunos otros señores que están sentados en esta sala y en estos bancos, incluso en los propios del señor Martínez.

En cuanto a la afirmación que ha hecho con relación a la expresión popular «dime con quién andas y te diré quién eres», estoy seguro de que con pocas palabras me va a entender el señor Martínez y va a comprender también que yo no pueda insistir más en el tema. Yo creo que esta afirmación podríamos trasladarla también a su propio Partido Político respecto a determinadas visitas. No creo que porque haga esos viajes se pueda decir que está identificado con esos países, con los que a veces incluso ha firmado sustanciosos comunicados conjuntos que hemos tenido ocasión de analizar alguna vez y a los cuales no me quiero referir.

Esto liga con el momento en que dejamos o no de ser amigos de los responsables de los países. Tenemos relaciones con los países. Hay ciento diecisiete países, mencionados por Amnesty International hace poco más de un año, en los que no se cumplen, no se respetan los Derechos Humanos. Quizá la política alternativa que ofrece el señor Martínez sea la de que solamente tengamos relaciones con los países que respetan los Derechos Humanos.

Ciertamente, esto resolvería el problema de la insuficiencia, porque sería ampliamente suficiente el servicio diplomático actual si sólo mantuviéramos relaciones con esos países. *(Risas.)*

En cuanto a las condiciones del restablecimiento por la ruptura de relaciones diplomáticas, ya en el propio comunicado del Gobierno, hecho pocas horas después de producirse los hechos, se habla de que se proceda a un total esclarecimiento de los hechos.

Se procede primero a una ruptura de las relaciones, lo cual significa que es un gesto que va mucho más lejos de la simple llamada a consulta, de la simple retirada del Embajador. Tenemos de ello algunos supuestos, como, por ejemplo, el caso del Irán y el más próximo para nosotros, el de Francia con respecto a Libia, en que se ha llamado a consulta al Embajador y se ha procedido a la suspensión de la acción diplomática. La ruptura es algo más duro y exigente.

Por supuesto, si se procede a la ruptura y no a la simple suspensión o interrupción de las relaciones diplomáticas, quiere decir que se

exige un tipo de esclarecimiento, y concretamente eso es lo que se pide en el comunicado del Gobierno, del Consejo de Ministros del día 1 de febrero: que se proceda a un total esclarecimiento de los hechos, que se identifique a los responsables de la violación de nuestra Misión diplomática. No es que sea simplemente el que se pueda hacer una afirmación por parte del Gobierno de Guatemala de que se han cumplido los trámites correspondientes, en ningún caso, porque se ha de proceder a la identificación de cuáles son los responsables de la realización de los actos en la Misión diplomática. Y para esta satisfacción no basta simplemente con el carácter declarativo de lo que haga el Gobierno de Guatemala, sino que tiene que hacerse en la medida en que sea plenamente satisfactorio para el Gobierno español. No basta simplemente, por consiguiente, con una declaración, sino con un juicio de valor que haga el Gobierno español en relación con el comportamiento adoptado por el Gobierno de Guatemala. Eso es el alcance que tiene esa ruptura de relaciones.

Y respecto de los becarios, debe saber el señor Martínez que la ruptura de relaciones diplomáticas entraña la ruptura de las relaciones culturales. Por consiguiente, quedan suspendidas, suprimidas, aquellas facilidades que se habían dado, examinando naturalmente los supuestos, pero sobre la base de la ruptura, tanto de las relaciones culturales como de las de cooperación técnica.

Hay una misión de tres representantes españoles que está ejerciendo la cooperación técnica con el Gobierno de Guatemala y en este momento vuelven a España. Lo que se mantiene es la relación estrictamente comercial. Hay un Consejero de Embajada español que desde el pabellón de Venezuela estará en Guatemala para la defensa de los intereses de los españoles. Me parece que es una atención imprescindible y fue un anuncio que se hizo en la primera reunión que el Director General de Política Exterior tuvo con los miembros de la colonia española.

Por supuesto, comparto plenamente la afirmación que ha hecho el señor Martínez. Creo que es innecesario que insista sobre el cese de esa infamante campaña contra el Embajador, que es realmente inadmisibles, y creo que está en el sentir de la inmensa mayoría de los miembros de esta Cámara y del pueblo español el terminar con algo que realmente a todos tanto nos afecta.

En relación con la última afirmación, referente a la presencia en España del ex-Canciller, aquí creo que es válido ciertamente el mismo criterio que he expuesto antes. El señor Martínez sabe que son muchos los Ministros de Asuntos Exteriores de países que no respetan los Derechos Humanos que han venido y visitado España. Lo que no sé es a qué se debe esa calificación de «bombo y platillo»; no sé cuál es la aportación concreta que se hizo con la presencia del pobre señor Molina Orantes cuando visitó España, no sé si el Protocolo del Ministerio le dio una atención especial, que yo ignoro.

Respecto de los viajes de S. M. el Rey, la responsabilidad es, como sabe muy bien y ha dicho el señor Martínez, del Gobierno, es decidido por el Gobierno, comunicado a la Cámara, y, en algún caso, como el de Argentina, fue objeto de debate en la Comisión de Asuntos Exteriores durante largas horas.

Agradezco las palabras dichas por don Fernando Alvarez de Miranda, palabras emocionantes y emocionadas hacia el señor Ruiz del Arbol y creo que en esas palabras aparece ciertamente el símbolo de lo que es el diplomático en el momento actual. Estoy seguro que al prestarle un homenaje a él, ha prestado un homenaje a todo lo que significa la joven diplomacia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ministro.

Debido al momento en que nos encontramos, dos y veinte de la tarde, y a la circunstancia de que el Grupo Comunista tiene intención de presentar un texto de resolución, si les parece a los señores miembros de la Comisión, voy a suspender la sesión durante cinco minutos para establecer consultas con los Portavoces de los Grupos Parlamentarios, y conocer exactamente si ese texto de resolución puede ser presentado conjuntamente por todos los Grupos, o algún otro Grupo tiene intención de presentar una resolución propia.

Suspendemos la sesión durante cinco minutos.

Después de una breve interrupción, dijo:

El señor PRESIDENTE: Los distintos Grupos Parlamentarios con representación en esta Comisión de Asuntos Exteriores que se encuen-

tran presentes han suscrito, de común acuerdo, el texto presentado en su momento por el Grupo Parlamentario Comunista.

Como ha habido una serie de modificaciones durante el trámite de consulta a los distintos Grupos Parlamentarios, en atención a que el señor Ballesteros fue el iniciador de esta propuesta, le rogaría que leyera el texto en voz alta y reposadamente, para que todos podamos tomar nota de las modificaciones establecidas. El señor Ballesteros tiene la palabra.

El señor BALLESTEROS PULIDO: Antes de pasar a su lectura, quiero expresar que las diferencias que hay respecto al texto leído antes son de dos caracteres: primero, el pasó del punto cuarto a punto primero, a petición del Grupo Centrista, y, segundo, un cambio de redacción y traslado de una frase del apartado segundo al tercero. Por tanto, paso a leerlo:

«La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de las Cortes Generales, ante los trágicos sucesos ocurridos en Guatemala, que han supuesto el ataque a nuestra Embajada ante el citado país y la muerte de treinta y nueve personas, así como ante la ocupación de nuestra Embajada en El Salvador, declara que:

»Primero.—Expresa su posición contraria a los métodos de ocupaciones de Embajadas, por muy legítimos que puedan ser los móviles.

»Segundo.—Condena de la manera más enérgica el ataque y destrucción de la Embajada española en Guatemala y el asesinato de quienes estaban dentro, negación de las más elementales normas de civilización y Derecho Internacional.

»Tercero.—Apoya la decisión del Gobierno español de romper las relaciones diplomáticas con el Gobierno de Guatemala.

»Cuarto.—Estima en todo su valor el comportamiento del Embajador español en Guatemala, señor Cajal, y aprecia muy positivamente las medidas que tomó para evitar la tragedia, salvar la vida de los ocupantes y defender la dignidad nacional española.

»Quinto: Manifiesta su preocupación por el mantenimiento en América Latina de regímenes que no respetan los derechos humanos, expresando su confianza en que pronto logren los pueblos hermanos de América Latina regímenes plenamente democráticos, e insta al Gobierno

español a que oriente su actividad en los Organismos Internacionales a este fin.»

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Entiende esta Mesa que todos los miembros presentes aprueban por unanimidad dicha resolución. *(Pausa.)*

Tiene la palabra el señor Martínez.

El señor MARTINEZ MARTINEZ: En la última frase creo que hay que hacer una corrección y decir: «e insta al Gobierno español a que oriente a este fin su actividad en los Organismos Internacionales» en vez de «a que oriente su actividad en los Organismos Internacionales a este fin».

El señor PRESIDENTE: ¿Quiere precisar su propuesta?

El señor MARTINEZ MARTINEZ: Decir «e insta al Gobierno español a que oriente a este fin su actividad en los Organismos Internacionales».

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Satrústegui.

El señor SATRUSTEGUI FERNANDEZ: Dos cosas de detalle. Una de ellas, donde dice que evitó la tragedia...

El señor PRESIDENTE: ¿Qué punto de la resolución?

El señor SATRUSTEGUI FERNANDEZ: El punto cuarto, donde se habla del comportamiento del Embajador, en lugar de «para evitar» debe decir «para tratar de evitar», porque no lo evitó, desgraciadamente.

Segundo, cambiar la expresión «América Latina» por Iberoamérica, porque el Gobierno y todos los organismos se refieren a Iberoamérica.

Tercero, que en el primer punto hubiera una manifestación más condenatoria de las ocupaciones, que la frase que está puesta.

El señor PRESIDENTE: No estamos abriendo ahora la discusión de la resolución, señor Satrústegui. Entiendo que los representantes de los Grupos Parlamentarios han dado su acuerdo fundamental al texto que se presenta. Señores representantes de los Grupos Parlamentarios, ¿entiendo que es así? *(Asentimiento.)* Entiendo que la declaración leída, con las modificaciones posteriores efectuadas por los señores Martínez y Satrústegui, es de pleno reconocimiento de todos los miembros de la Comisión; por tanto, ¿queda aprobada por unanimidad? *(Asentimiento.)* Muchas gracias a todos los señores miembros de la Comisión.

Se levanta la sesión.

Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.